



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Máster

DICTAMEN JURÍDICO SOBRE EL DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Autora

ITURRIOZ SUÁREZ, ANA CONCEPCIÓN

Directora

GAMARRA CHOPO, YOLANDA

FACULTAD DE DERECHO DE ZARAGOZA

2019



Universidad Zaragoza

Facultad de Derecho
Universidad Zaragoza



INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	5
II.	ANTECEDENTES DE HECHO	8
III.	CUESTIONES JURÍDICAS	11
IV.	LEGISLACIÓN APLICABLE	12
V.	FUNDAMENTOS JURÍDICOS	12
1.	LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA INDIVIDUAL ANTE EL TEDH	12
2.	PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA ANTE EL TEDH	17
3.	EL CONTROL JURISDICCIONAL DEL TEDH.	20
4.	PROCEDIMIENTO ANTE EL TEDH	27
4.1	Primer examen de la demanda	27
4.2	Examen sobre la admisibilidad y el fondo del asunto	29
5.	REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA	32
5.1.	Causas de inadmisión por razón del procedimiento	32
A)	No agotar las vías internas de recurso	32
B)	Incumplimiento del plazo de interposición de la demanda ante el TEDH	37
C)	Demanda anónima	39
D)	Demanda reiterativa	39
E)	Demanda abusiva	40
a)	Desinformación del Tribunal	41
b)	Uso de lenguaje abusivo	41
c)	Violación de la confidencialidad del acuerdo amistoso	41
d)	Demanda manifiestamente fraudulenta	42
5.2.	Causas de inadmisión por razón de la competencia del Tribunal	42
A)	Incompatibilidad <i>ratione loci</i>	42
B)	Incompatibilidad <i>ratione temporis</i>	42
C)	Incompatibilidad <i>ratione personae</i>	43
D)	Incompatibilidad <i>ratione materiae</i>	44
5.3.	Causas de inadmisión por razón de fondo	48
A)	Carencia manifiesta de fundamento	47
B)	Ausencia de perjuicio importante	49
6.	FONDO DEL ASUNTO	50
VI.	CONCLUSIONES	54
VII.	BIBLIOGRAFÍA	61
VIII.	JURISPRUDENCIA	65
IX.	ANEXOS	

ABREVIATURAS

- ANPU: Asociación Nacional Profesional de Policía Uniformada
- art.: artículo
- BOE: Boletín Oficial del Estado
- CE: Constitución Española (1978)
- CEDH: Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
- cit: cita
- CM: Comité de Ministros
- CP: Código Penal
- DDFF: Derechos Fundamentales
- DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos
- HUDOC: Base de datos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- LECrím: Ley de Enjuiciamiento Criminal
- LO: Ley Orgánica
- LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial
- LOTIC: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
- nº: número
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- p: página
- pp: paginas
- PIDCYP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- RES: Resolución
- RTEDH: Reglamento de procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos´
- ss: siguientes
- STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- TC: Tribunal Constitucional
- TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- TS: Tribunal Supremo
- UE: Unión Europea

DICTAMEN que se emite a petición del Sr. T.J. declarado culpable de un delito de arresto abusivo, asalto y desobediencia por la Audiencia Provincial de Zaragoza, resolución que fue recurrida ante el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, ambos recursos fueron desestimados.

El objeto de este dictamen es discernir si el Señor T.J puede interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una violación del artículo 6.1 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales como consecuencia de la interposición de un recurso de reforma emitido por el Ministerio Fiscal contra la resolución de archivo de las actuaciones en fase de instrucción por el órgano jurisdiccional competente, una vez transcurrido el plazo legal para su interposición, sin conocer la fecha exacta de recepción del sumario por el Ministerio Fiscal.

Para la elaboración del presente dictamen ha sido necesario abundar en la normativa de la materia, así como las circunstancias concretas del caso para determinar si realmente los hechos relatados son constitutivos de una violación del derecho a un juicio justo.

I. INTRODUCCIÓN

El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en adelante mencionado como CEDH, es un tratado internacional que hay que situarlo en el contexto de la postguerra mundial (1949) adoptado el 4 de noviembre de 1950 en Roma y del que España es parte desde octubre de 1979 (BOE, nº243, de 10 de octubre de 1979), con la finalidad de proteger los ideales y principios que son comunes a los Estados europeos y favorecer su progreso económico y social. Los Estados Miembros del Consejo de Europa reconocen a toda persona que esté bajo su jurisdicción la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

El CEDH y el conjunto de Protocolos Adicionales regulan principalmente derechos civiles y políticos. Entre estos derechos algunos son absolutos, no excepcionales aplicables en períodos de guerra o graves desórdenes públicos como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, entre otros. Un segundo grupo que son los derechos derivados del buen funcionamiento de la Administración de Justicia entre los que nos interesa mencionar en este caso es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y, por último, unos derechos limitados, esto es condicionados por

seguridad nacional, bienestar económico del país, la defensa del orden entre otras causas de limitación.¹

Para que sea efectivo el compromiso internacional de protección internacional de los derechos humanos por los Estados miembros del Consejo de Europa, se crean unos órganos internacionales y un procedimiento para llevar a cabo la aplicación del CEDH.

El TEDH es el órgano que tiene la función de controlar la correcta protección de los Derechos Humanos en los sistemas jurídicos internos de los Estados parte del CEDH. En otras palabras, el TEDH es un Tribunal con el ámbito de aplicación internacional de protección de los DDFF.

El proceso justo o equitativo está recogido en los art.10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que regulan un conjunto de garantías procesales para apoyar los medios de protección de los DDFF reconocidos a su vez en el CEDH.²

El concepto del derecho a un juicio justo o equitativo debe estar relacionado con el término de justicia que cada uno de los ordenamientos nacionales tienen un concepto de justicia diferente por los valores jurídicos, culturales e históricos. Esta diversidad de sistemas procesales nos lleva a entender la dificultad de determinar su contenido, por ello el conjunto de garantías procesales que contiene el artículo 6 del CEDH no es absoluto, cabe que se entienda alguna garantía añadida que no esté regulada en este precepto.

Entre las garantías que componen el concepto a un juicio justo y equitativo resaltan el principio de igualdad de armas y el derecho a un procedimiento contradictorio que derivan de la redacción realizada en el precepto, y que permite que las partes tengan una posición igualitaria en el proceso sin producir ninguna desigualdad y conozcan toda la documentación y alegaciones de las partes y que tengan acceso a responder a estas actuaciones de forma contraria. Otra de las garantías relevantes de este precepto es el derecho a una resolución motivada, esta motivación no es una obligación de dar solución a cada pretensión que ha sido planteada, sino que sirva para que el que ejerce su derecho a la tutela judicial efectiva además de garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales el procedimiento sea igualitario entre las partes y permita

¹ MONEREO ATIENZA, C.; MONEREO PÉREZ, J. L.; ALCÁZAR ORTIZ, S. *La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea*. [s. l.]: Comares, Granada, 2017, p.59.

² OVEJERO PUENTE, A. M., *El derecho al juicio justo en el convenio europeo de derechos humanos*, 1ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

ARBERÍ LLOBREGAT, J.; MORENILLA ALLARD, P. *Convenio europeo de derecho humanos y jurisprudencia del Tribunal Europeo relativa a España: textos, protocolos, nuevo Reglamento del Tribunal, normas complementarias y formulario de demanda*. Primera edición, Bosch, Barcelona, 1999.

rebatir las alegaciones planteadas por la parte contraria. Ello nos dota de una resolución basada en fundamentos jurídicos que proporciona una seguridad al ciudadano de que ha sido escuchado y se ha puesto fin al conflicto que tenían las partes de forma justa.³

El derecho a un proceso equitativo tiene gran importancia porque es un derecho que salvaguarda otros derechos fundamentales del CEDH. Es decir, el derecho a un proceso equitativo se compone de un conjunto de derechos procesales creados para endurecer el sistema de control y protección de los DDFF reconocidos en el CEDH.

Este derecho fue reconocido a través del derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el art. 24 de la Constitución Española (CE) adecuando nuestro ordenamiento jurídico al sistema de derechos fundamentales. En España se adaptó el artículo 6 del CEDH perfeccionándolo y desarrollándolo técnicamente y estableciéndolo como un derecho fundamental, y tiene protección ante la jurisdicción constitucional y ordinaria (art. 24 y 53 CE). Se trata de una prestación que se debe ejercitar a través de los medios legales regulados por la ley.

Hay que resaltar que los derechos fundamentales recogidos en el CEDH recogen unas garantías mínimas de estos derechos que deben ser reconocidos en el Derecho de la Unión Europea y también en relación de los ordenamientos de los Estados Miembros.

La ratificación de este Tratado por España se realizó en 1979, así que el CEDH está integrado en el ordenamiento nacional y es una fuente de derecho que tiene la misma importancia que el resto de la normativa interna y por su posición jerárquica disfruta de preeminencia en la aplicación de las normas.⁴

Por tanto, se puede ver la gran importancia que tiene el art.6 del CEDH porque garantiza el acceso a la jurisdicción, es decir, recoge el conjunto de garantías que hace posible que se puedan aplicar el resto de derechos recogidos en el CEDH y obtener una resolución judicial fundada en derecho y que un gran número de sentencias dictadas por el TEDH versan sobre el derecho a un juicio equitativo o justo, que es un tema que necesita ser controlado y acomodado a las nuevas situaciones.

³ OVEJERO PUENTE, A. M., El derecho al juicio justo...*cit.* p.45

MILONE, C., *El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

⁴ MORENO VIDA, M.N., «El derecho a un proceso equitativo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», *Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, nº 145, 2018, pp. 87 a 119.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - El señor T.J. mayor de edad y en la actualidad, con domicilio en Zaragoza. En el momento que ocurrieron los hechos era policía nacional y vivía en Barcelona.

El 21 de mayo de 1989 fue a Gallur (Zaragoza) para celebrar la primera comunión de su sobrina. A las 20:30 tras la finalización del banquete en el que había ingerido una cantidad considerable de alcohol, se fue a un café con unos amigos.

En este local se encontraban dos extranjeros uno de ellos nacional de Gambia y el otro de nacionalidad portuguesa, los dos trabajaban como temporeros en un pueblo cercano.

El Señor T.J les solicitó que le enseñaran sus papeles de identidad, que ambos procedieron a enseñar, en concreto mostraron un permiso de trabajo y un documento de identidad de la República Portuguesa y el de Gambia.

El Señor T.J no le pareció la documentación aportada suficiente, enseñó su identificación de policía, sacó la pistola y disparó al aire. En el bar se encontraban unas veinte personas que abandonaron el lugar por el miedo que les provocó esta situación.

El policía fuera de servicio en ese momento golpeó en los testículos al nacional portugués y tiró su documentación al suelo denigrando a este sujeto.

A punta de pistola obligó a los dos extranjeros a salir del bar para llevarlos al cuartel de la Guardia Civil, en el trayecto el ciudadano de nacionalidad de Gambia había bajado ligeramente los brazos por fatiga o por las características del terreno, Sr. T.J le golpeó con la culata de la pistola en la boca rompiéndole dos dientes, que uno de ellos lo recogió un peatón que fue testigo de esta agresión.

Ante los hechos producidos, el oficial responsable del cuartel de Gallur llamó a su superior para que se hiciera cargo del caso. Revisó las tarjetas de residencia de los extranjeros y los documentos de identidad presentados y registró a los dos extranjeros. En este registro no se encontró objeto o sustancias prohibidas. Ante la falta de pruebas los puso en libertad, después de tomarles declaración y ser asistidos por el médico.

Mientras el superior se hacía cargo del caso, el denunciante realizó una serie de actos indeterminados contra los guardias civiles, que les obligó a quitarle el arma y ponerle unas esposas.

A las 23:30 le leyeron sus derechos al Señor T.J. y a las 3 de la mañana se puso a disposición del Juez de Guardia de Zaragoza quien le tomó declaración en presencia del abogado de la policía y posteriormente lo puso en libertad.

Segundo. - Se inició instrucción preliminar contra el señor T.J. por arresto abusivo, asalto y desobediencia. El 29 de mayo de 1989, el Juez instructor remitió el expediente a la Audiencia Provincial de Zaragoza que era el órgano jurisdiccional que tenía competencia en materia de demandas penales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

El 18 de septiembre de 1989, la ANPU, la asociación profesional de policías de la que era miembro el señor T.J. se posicionó como acusación particular contra los guardias civiles de Gallur, solicitando al Tribunal que se declarase al demandante inocente de los cargos que se le imputan y se iniciará una investigación sobre la responsabilidad de los dos guardias civiles que lo habían detenido.

El 28 de noviembre de 1989, la Audiencia Provincial se encargó de la instrucción del caso. El 18 de diciembre de 1989 el señor TJ compareció ante el Juez acompañado de abogado que representaba al señor T.J. y a la ANPU.

Tercero. - Una vez finalizada la fase de instrucción, el 2 de febrero de 1990, el sumario fue comunicado simultáneamente al órgano jurisdiccional correspondiente y a la ANPU sobre la apertura del juicio oral conforme al artículo 790.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal que posteriormente será mencionada como LECrim.

Se emitió una sentencia por el Tribunal Constitucional nº55/1990 de 28 de marzo declarando inconstitucional el artículo en el que especificaba que las infracciones cometidas por las Fuerzas de Seguridad debían ser juzgadas por la Audiencia Provincial, por ello se remitió el sumario al Juez de Instrucción de Zaragoza.

Por la flagrante contradicción en las declaraciones relativas a la vía de hecho y a la oferta de droga al demandante, el Juez de Instrucción declaró, el 10 de septiembre de 1990, que no se había cometido ningún hecho punible y procedió al archivo del asunto.

Se decretó la comunicación del sumario al Ministerio Fiscal en la Audiencia Provincial de Zaragoza según lo recogido en el artículo 789.4 de la LECrim. Firmado por el Juez, en la parte inferior del documento el letrado de la administración de Justicia incluyó una anotación: «Realizado sin interrupción, de lo cual yo soy testigo».

La decisión fue notificada al Señor T.J al día siguiente, sin que esté relatado en el sumario la notificación al Ministerio Fiscal.

Cuarto. - El 7 de noviembre de 1990, el letrado de la Administración de Justicia testificó que el Ministerio Fiscal había realizado la devolución del sumario y había interpuesto recurso de reforma y subsidiariamente recurso de apelación contra la Resolución de archivo de las actuaciones con fecha de 13 de septiembre de 1990.

El 8 de diciembre de 1990, mediante providencia declaró que el recurso de reforma se había interpuesto correctamente. Esta providencia fue notificada al acusado al día siguiente.

El 12 de noviembre de 1990, en representación de la ANPU se pidió la inadmisión del recurso por extemporaneidad y que se confirmará el archivo de las actuaciones. Esta petición fue rechazada al entender que la decisión recurrida no era susceptible de recurso, porque es una formalidad del procedimiento. Pero el Juez declaró que los fundamentos sobre los que se pide la inadmisión del recurso serían analizados por el órgano jurisdiccional correspondiente y en el momento preciso. Estos hechos fueron comunicados al acusado.

El día 4 de diciembre de 1990, el órgano instructor confirmó que el recurso que interpuso el Ministerio Fiscal se emitió dentro de plazo, porque al no haber ninguna indicación sobre la recepción del Ministerio Fiscal de la resolución del archivo y del sumario del caso, se debía entender que el recurso había sido emitido cumpliendo el plazo de tres días establecido en la normativa.

Quinto. - El juez de Instrucción, el día 12 de febrero de 1991, declaró el sobreseimiento definitivo de la causa de los Guardias Civiles acusados por la ANPU. Respecto al Señor T.J se procedió a la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El 20 de febrero de 1991, el Señor T.J. designó abogado y procurador para llevar a cabo su defensa.

El 14 de marzo de 1991, se depositó en nombre de la ANPU escrito de defensa en el que se incluyen los medios de prueba para probar la inocencia del acusado.

Posteriormente a la entrega del sumario al Tribunal competente, este órgano jurisdiccional solicitó una aclaración sobre la representación y la defensa de la ANPU y el acusado que era coincidente.

El día 15 de mayo de 1991 se aclaró al órgano jurisdiccional que sólo se mantenía la representación del Señor T.J, ya que es al único que se le está enjuiciando, hechos recogidos por la Audiencia Provincial en una providencia de 22 de mayo de 1991.

Sexto. - La Audiencia Provincial declaró al acusado culpable y que los hechos relatados son constitutivos de un delito de arresto abusivo, asalto y desobediencia. Siendo condenado a seis meses y 15 días de prisión, a una multa de 200.000 pesetas, a indemnizar a las víctimas por los daños causados y fue suspendido de sus funciones durante seis meses.

Séptimo. - El 12 de noviembre el Señor T.J. interpuso un recurso de casación fundamentado principalmente en la extemporaneidad del recurso del Ministerio Fiscal en contra de la decisión del 10 de septiembre de 1990.

El Tribunal Supremo rechazó el recurso, ya que declaró que no hubo una violación del derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el artículo 24.1 de la CE porque no era posible saber la fecha exacta en la que había sido enviado el sumario a las autoridades judiciales, ni cuando se produjo la notificación de la decisión de archivo de las actuaciones. Entendiendo que estos hechos eran un mero error procedimental por tanto no cabe que se impida que se conozca sobre el fondo del asunto. Declaró que no se había afectado a los derechos de defensa, ya que el acusado disponía de todos los medios necesarios para defenderse de las acusaciones contra él, tanto en primera instancia como ante el Tribunal Supremo.

Octavo. - El 6 de julio de 1993, el Señor T.J. interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la extemporaneidad del recurso de reforma del Ministerio Fiscal. El recurso fue desestimado por falta de fundamento, porque se trata de una cuestión ordinaria, que no podía ser enjuiciada mediante recurso de amparo. El Tribunal Constitucional entendió que el recurso no era extemporáneo, ya que al no poderse determinar la fecha de recepción del sumario por las autoridades judiciales se debe hacer una interpretación expansiva de los artículos de la LECrim. Entendiendo esta interpretación como la más favorable a la admisibilidad del recurso.

III. CUESTIONES JURÍDICAS

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se suscitan las siguientes cuestiones jurídicas:

Primera. - Tras la inadmisión del recurso de casación y el recurso de amparo por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado Español, hay que determinar quién tiene legitimación activa y legitimación pasiva para ser parte en un procedimiento ante el TEDH.

Segunda. – Después de determinar quién puede ser parte en un procedimiento ante el TEDH, hay que precisar cómo debemos redactar la demanda y modo de presentación de esta para su tramitación.

Tercera. - Establecer los Órganos de control jurisdiccional y sus competencias

Cuarta. - Procedimiento ante el TEDH, primer examen y examen sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.

Quinto- Requisitos que debe cumplir la demanda para ser admisible

Sexto- Análisis del Fondo del asunto comprobando si los hechos constituyen una violación del derecho a un juicio justo.

IV. LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la resolución de las indicadas cuestiones jurídicas planteadas debe acudirse a la siguiente normativa:

- Constitución Española. BOE, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.
- Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
- Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales se aprueba y ratificada en España mediante Instrumento de Ratificación publicado en el BOE nº. 152, de 26 de junio de 1998.
- Resolución de la Asamblea General 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, «BOE» núm. 243, de 10 de octubre de 1979, páginas 23564 a 23570 (7 págs.)
- Reglamento de Procedimiento que incorpora las modificaciones adoptadas por el TEDH en Sesión Plenaria el día 19 de septiembre de 2016, en vigor el día 1 de agosto de 2018,
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, «BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977, páginas 9337 a 9343

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA INDIVIDUAL ANTE EL TEDH

El interesado que ha visto violado su derecho a un juicio justo regulado en el art. 6.1 del CEDH, puede presentar una demanda ante el TEDH quien debe velar por la protección de los derechos y libertades recogidos en el CEDH.

La legitimación activa para poder interponer una demanda ante el TEDH está condicionada a que se trate de una víctima de una violación de los derechos reconocidos por el

CEDH y sus protocolos. El análisis del artículo 34 del CEDH y el artículo 1 nos dota la respuesta para determinar quién puede encontrarse en esta situación.

Primero, si se habla de una violación hay que determinar quiénes son los sujetos obligados a cumplir el CEDH, es decir, a quién corresponde la legitimación pasiva, las disposiciones del CEDH reconocen

el término de «Altas Partes Contratantes» que hace referencia a los Estados Miembros del Consejo de Europa que son los que han ratificado el Convenio. Esta obligación debe ser respetada por el Estado en su totalidad con independencia de su organización, esto es en un Estado en el que haya zonas del territorio donde puedan actuar de forma independiente deberá respetar los derechos protegidos en el CEDH.

Además, la responsabilidad del Estado puede provenir de la actuación de un particular, cuando un Estado o sus organismos por acción u omisión no han actuado de forma adecuada para prevenir que se produjera una violación de los derechos humanos.⁵

Hay que resaltar que están obligados a respetar los derechos y libertades definidos en el CEDH, hay que hacer mención de que para que un Estado pueda ser obligado es necesario que el CEDH sea ratificado por ese Estado para tener aplicación directa en el Estado en cuestión.

Esto es habitual con los Protocolos adicionales que integran nuevos derechos, por tanto, requieren la ratificación de cada Estado, sin ser necesaria la ratificación de todos los Estados Parte para su plena eficacia.

También hay que destacar en este apartado que el Estado demandado tiene la obligación de cumplir las medidas cautelares reguladas en el art. 39 del Reglamento del Procedimiento del TEDH, posteriormente mencionado como RTEDH que le imponga el Tribunal, realizando las medidas adecuadas para su cumplimiento, que el TEDH controlará si el Estado cumple con las medidas cautelares impuestas.

Además, para que el TEDH determine los hechos que constituyen una presunta violación del CEDH las partes deben participar activamente auxiliando al TEDH informándole de toda cuestión que sea relevante.

En una demanda individual la no cooperación del Estado demandado, no aportando documentación o información del Estado sin aportar una justificación, provoca además de la

⁵ MARTÍN RETORTILLO-BAQUER L., «El concepto de víctima de una violación de los derechos como determinante para el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», *Revista de Administración Pública*, nº175, enero-abril de 2008, pp. 253-284.

CASADEVAL J., *El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p.59.

posible estimación de la demanda, un incumplimiento del art. 38 del CEDH en el que obliga a los Estados a dotar de todas las facilidades necesarias al TEDH.

El siguiente punto para analizar es quiénes tienen la titularidad de los derechos y libertades recogidos en el CEDH que deben ser protegidos por los Estados. En este caso cualquier persona puede recurrir contra un Estado cuando la violación se haya producido en la jurisdicción de un Estado interesado con independencia de su residencia, capacidad, estado civil, nacionalidad como se ve reflejado en la STEDH(Sala) Caso Van der Tang c. España, nº 19382/92 , de 13 de julio de 1995⁶, en el que el interesado tenía nacionalidad holandesa pero los hechos se produjeron en España. Las demandas únicamente pueden ser presentadas por personas vivas o en su nombre, por tanto, una persona fallecida no puede presentar una demanda ante el Tribunal, ni a través de un representante.

También tienen legitimación activa las personas jurídicas excluyendo a una organización gubernamental. Para determinar qué organizaciones tienen legitimación hay que determinar qué se entiende por organización gubernamental. Una organización gubernamental se entiende como una persona jurídica que ejerce el poder público o que gestionan un servicio público bajo el control de una autoridad. La Administración del Estado ejerce funciones públicas y afecta a los órganos centrales del Estado, y a las autoridades descentralizadas, como colectividades territoriales o cualquier organización que gestione un servicio público bajo supervisión de la Administración del Estado.

En la STEDH (Sección Cuarta), nº29134/03, El Gobierno de la Comunidad Autónoma de País Vasco c. España, de 3 de febrero de 2004⁷ se ve reflejado que el demandante y la Comunidad Autónoma de País Vasco tienen la consideración en España como autoridades públicas, que tienen competencias oficiales que le dotan la CE y la Ley, sin tener en cuenta el grado de autonomía. Por lo tanto, se reputa que la Comunidad Autónoma es una organización gubernamental y esta demanda es inadmisibles por *ratione personae*.

Para poder determinar que una organización no es gubernamental hay que analizar su estatus jurídico, las potestades adjudicadas, la naturaleza de la actividad que ejerce y en el ambiente que se enmarca esta actividad.⁸

También pueden interponer un recurso ante el TEDH cualquier grupo de particulares con excepción de los entes locales u órganos públicos por la prohibición de realización de una

⁶Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164331> Última visita el día 1 de noviembre de 2019.

⁷ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-44736> Última visita el día 1 de noviembre de 2019.

⁸Fuente:[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU\(2017\)608734_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf). Última visita el 13 de noviembre de 2019.

actividad por el Estado del que dependen.⁹ Entre los grupos de particulares que pueden interponer un recurso ante el TEDH, se encuentran las comunidades de propietarios como se observa en la STEDH (Comité de la Sección Tercera), Comunidad de Propietarios Pando nº20 contra España, nº64204/10, de 20 de diciembre de 2016¹⁰ que alegan la violación del art. 6 del CEDH por una duración excesiva del proceso que versaba sobre la obligación del pago de una reparación de un muro medianero que forma parte del edificio de la Comunidad de Propietarios, como el demandante no contribuyó a que el procedimiento durará más tiempo se declaró que hubo una violación del art. 6 de la CEDH por una excesiva duración del procedimiento excediendo el plazo razonable de resolución, ya que el procedimiento duró 18 años.

Las personas físicas, personas jurídicas, cualquier grupo de particulares deben ser víctimas de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos recogidos en el CEDH. El concepto de víctima ha sido elaborado a través de la jurisprudencia del TEDH, por lo tanto, es un concepto autónomo e independiente del Derecho interno de los Estados Parte. Este concepto engloba tanto la víctima directa como la indirecta.

Según la STEDH(Sala) Amuur c. Francia, nº19776/92 del 25 de junio de 1996¹¹ determina que el concepto de víctima directa:

«es la persona directamente afectada por el acto u omisión en cuestión, la existencia de una violación de los requisitos de la Convención que se concibe incluso en ausencia de lesiones; En consecuencia, una decisión o medida favorable al solicitante es, en principio, suficiente para privarlo de la condición de "víctima" sólo si las autoridades nacionales han reconocido, explícita o sustancialmente, y luego repararon la violación de la Convención «».

Por tanto, una víctima directa es la afectada directamente por la acción u omisión del Estado Parte por una violación, que no es obligatorio que cause un detrimento patrimonial que deba ser objeto de indemnización por el causante.

La condición de víctima debe perdurar durante todo el procedimiento, ya que si se pierde esta condición la demanda será archivada según lo recogido en la STEDH (Sección Primera) de Ohlen c. Dinamarca, nº63214/00, de 24 de febrero de 2005¹². Para que se produzca la pérdida de la condición de víctima no basta únicamente con el reconocimiento del Estado Parte de la

⁹ Fuente: https://www.echr.coe.int/echr.www.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SPA GUÍA PRÁCTICA Última visita el 27 de noviembre de 2019.

¹⁰ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-162186> Última visita el 27 de noviembre de 2019.

¹¹ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-57988> Última visita el 27 de noviembre de 2019.

¹² Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-68389> Última visita el 27 de noviembre de 2019.

violación, sino que es necesario que se lleven a cabo las medidas necesarias para que esta violación de derechos no se repita y enmendarla de forma adecuada y suficiente.

No serán admisibles las demandas interpuestas al Tribunal que su finalidad sea ejercitar una acción popular o demandas en las que las imputaciones son genéricas, indeterminadas o que se interponen a través de un grupo de personas abstracto.

Se reconoce la condición de víctima aquellas personas que tienen altas posibilidades de padecer una violación de sus derechos, las llamadas víctimas potenciales. Un ejemplo de víctima potencial sería el de la STEDH(Pleno) Soering c. Reino Unido, nº 14038/88 de 7 de julio de 1989¹³ que especifica que:

«“En principio, no corresponde a los órganos del Convenio resolver sobre las violaciones futuras. Sin embargo, hay que hacer una excepción a esta regla general cuando un fugitivo alega que la ejecución de la resolución de extradición infringirá el artículo 3 por las consecuencias que se teme se produzcan en el país de destino. Está en juego la eficacia de la garantía que establece el precepto, a la vista de la gravedad y del carácter irreparable del posible sufrimiento del interesado”».

En este supuesto la extradición del sujeto provocaría en el sujeto penas o tratos inhumanos que están prohibidos en la regulación del Convenio y por lo tanto ante esa previsión tiene condición de víctima potencial. Hay que destacar que para que sea determinado como víctima potencial debe aportar los documentos suficientes para probar que se va a producir esa situación.

También tiene legitimación activa para interponer un recurso ante el TEDH, la víctima indirecta, es decir, una persona que tiene un vínculo particular y personal con la víctima directa. Esta situación es aceptada por el TEDH en relación con la violación de unos determinados derechos y para que se apliquen de forma efectiva las disposiciones más fundamentales del Convenio. Uno de los supuestos en los que se acepta la demanda de una víctima indirecta es cuando la presunta víctima, de la violación muere antes de presentar la demanda. Una persona allegada o pariente cercano puede presentar una demanda sobre la violación de determinados derechos reconocidos, pero esta violación debe estar asociada al fallecimiento o desaparición que originó la queja fundada en el derecho a la vida como ejemplo en la STEDH (Sección Cuarta), Caso Van Colle c. Reino Unido, nº 7678/09, de 13 de noviembre de 2013¹⁴ recoge lo siguiente:

¹³ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164736> Última visita el 29 de noviembre de 2019.

¹⁴ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-114473> Última visita el 29 de noviembre de 2019.

«“El Tribunal recuerda que los familiares cercanos, como los padres, de una persona cuya muerte se alega que asume la responsabilidad del Estado puede reclamar ser víctimas indirectas de la presunta violación del artículo 2,”»¹⁵

En los supuestos en los que la violación alegada no está vinculada íntimamente a la muerte o desaparición de la víctima directa, no se suele admitir la condición de víctima indirecta a un tercero, a excepción que el tercero pueda demostrar que tenía interés de ser parte.

La condición de víctima es reconocida a los parientes cercanos de la víctima directa si pueden demostrar tener interés moral en que el fallecido fuera eximido de toda culpabilidad, proteger la reputación de la familia y la del difunto, tener interés material en relación con las consecuencias directas sobre sus derechos patrimoniales y la existencia de un interés general que hiciera necesario analizar sus quejas.

El TEDH considera que no se obtiene la condición de víctima por el hecho de que en el Derecho interno le permita actuar en un procedimiento para realizar su queja, este fundamento recogido en la STEDH(Sección Tercera), del caso Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Pays-Bas, nº 57602/09, de 4 de octubre de 2011¹⁶determinan que:

«“la condición de víctima debe ser interpretada de manera autónoma e independiente de las nociones internas concernientes al interés o la legitimación activa”»

2. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL TEDH

Una vez hemos determinado quién tiene legitimación para ser parte ante el TEDH vamos a explicar cómo se inicia el procedimiento.

El inicio del procedimiento se lleva a cabo a través de la presentación de una demanda que como hemos mencionado anteriormente pueden interponerla una persona física, organización no gubernamental o grupos de particulares que se consideren víctimas en las demandas individuales (art.34 CEDH) y un Estado Parte si se interpone una demanda interestatal. (art.33 CEDH)

La redacción de la demanda se realiza a través de un formulario de demanda del TEDH que está disponible en la página web de la Corte de Europea de Derechos Humanos. Esta

¹⁵ Fuente: https://www.echr.coe.int/echr.www.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SPANISH/GUÍA_PRÁCTICA_Última_visita_el_27_de_noviembre_de_2019.pdf

MORTE GÓMEZ, C., *Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: condiciones de admisibilidad y modificaciones recientes del procedimiento*, 2ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

SIGNES DE MESA, J. I., *Derecho procesal europeo.*, Iustel, Madrid, 2019.

¹⁶ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-107247>, Última visita el 27 de 2019.

demanda es presentada por el propio demandante o por un representante. Su presentación se debe realizar por escrito y firmada por el demandante o su representante recogido en el art.45.1 del RTEDH.

Para rellenar el formulario de la demanda se deben cumplimentar todos los apartados aplicables al caso que se pretende tramitar. No se pueden utilizar abreviaturas, debe ser conciso y claro. Se puede utilizar el idioma de uno de los Estados que han ratificado el CEDH. En el procedimiento inicial las comunicaciones se realizarán en ese idioma, pero en las fases posteriores del procedimiento todas las comunicaciones se realizarán en uno de los idiomas oficiales en inglés o francés.

La demanda debe contener la siguiente información según el art.47 del RTEDH:

1. Los datos del demandante: su nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección
2. Los datos de su representante: nombre, profesión, números de teléfono y fax
3. Estado contra el que se dirige la demanda
4. Una exposición legible y concisa de los hechos; se deben relatar cronológicamente según fueron sucediendo, aportando los documentos que prueben los hechos que son objeto de queja
5. Una exposición clara y escueta de las vulneraciones del Convenio y argumentos pertinentes determinando qué artículos han sido violados específicamente y en qué medida los hechos producen una violación de una disposición del CEDH.
6. Una exposición comprensible y breve confirmando el cumplimiento por el demandante de los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 35 del CEDH.

Se debe ser concienzudo y ser preciso en determinar los hechos, las vulneraciones que se han producido reguladas en el CEDH con los argumentos precisos y sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, que deben ser cumplimentados en el espacio destinado para ello, el formulario da un espacio de cinco páginas, con la información redactada debe ser suficiente para que pueda conocer el Tribunal la naturaleza y objeto de la demanda. Si sobrepasa las cinco páginas, la Secretaría podrá pedir un resumen, que el envío de este resumen determinará la fecha de entrada de la demanda. Sobre estas materias se pueden aportar hojas adjuntas de un máximo de 20 páginas para dar más detalle sobre el asunto, pero con cinco hojas debería ser suficiente.

Este formulario debe tener la firma original del demandante o representante legal y debe estar acompañado de los siguientes documentos: copia de las decisiones o medidas denunciadas independientemente de su naturaleza, copia de los recursos presentados por el demandante y de

sus resoluciones y copia del recurso de amparo si fuera necesario, copia de la decisión que ponga fin a la procedimiento interno y fecha de notificación para probar que se ha cumplido el plazo para interponer la demanda.¹⁷

Estos documentos para fundamentar la demanda deben estar numerados cronológicamente y que se puedan identificar claramente y estar completos, estar clasificados por fecha y procedimiento, las páginas deben ser numeradas, sin grapar ni pegadas. Se deben presentar copias de estos documentos porque la documentación no será devuelta. Existe la posibilidad de que la documentación se pueda aportar a través de un CD-ROM o un USB si es muy numerosa cumpliendo siempre los requisitos regulados en el art.47 RTEDH.¹⁸

No se examinará la demanda si no se cumplen las formalidades exigidas salvo en tres excepciones:

1. El demandante dote una explicación satisfactoria del incumplimiento
2. La demanda solicite una medida cautelar
3. El TEDH decida otra cosa de oficio o a instancia de parte

Si no cumple los requisitos del contenido de la demanda está será archivada administrativamente, se le explicarán las causas de la inadmisión. El demandante tiene la posibilidad de volver a presentar la demanda siempre que esté dentro de plazo, supliendo los errores en los que haya acaecido y enviando la documentación que el considere necesaria además del formulario. La fecha que quedará registrada será la del segundo envío

El plazo para presentar la demanda es de seis meses desde que se notifica la sentencia definitiva que pone fin a la vía interna. La fecha de inicio se determina por la fecha de remisión del formulario de la demanda debidamente rellenada, que se acredita a través de la fecha del timbre o matasellos de correos. El formulario debe ser enviado por correo certificado o por correo ordinario para que las partes tengan constancia del envío. Tras la recepción de la demanda se abre un expediente numerado por el año de presentación que se debe hacer referencia a él en el resto de las comunicaciones. El demandante debe contestar a todas las comunicaciones que le haga la Secretaría porque si no se entenderá que no quiere proseguir con el procedimiento y se archivará el asunto.¹⁹

¹⁷ Fuente: https://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_SPA.pdf Última visita 10 de noviembre de 2019.

Fuente: https://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_SPA.pdf Última visita el 12 de noviembre de 2019.

¹⁸Fuente: https://www.echr.coe.int/Documents/Report_Rule_47_SPA.pdf Última visita el 13 de noviembre de 2019.

¹⁹ ORTEGA GIMENEZ A., «¿Cómo se debe presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?», *Economist & Jurist*, Vol.22, nº 178, 2014, p. 22-30

3. EL CONTROL JURISDICCIONAL DEL TEDH.

Una vez presentada la demanda individual, hay que determinar qué organismos van a examinar el recurso. En este caso hay que resaltar que los hechos relatados acontecen el 21 de mayo de 1989, y que se agotan las vías de recurso internas por la interposición de un recurso de amparo que fue rechazado el 21 de febrero de 1994. Desde este momento se empieza a contar el plazo de 6 meses para interponer la demanda ante el TEDH, por ello este plazo de seis meses transcurriría antes del 30 de octubre de 1998. Por tanto, hay que analizar el sistema de control establecido antes de la entrada en vigor del Protocolo N°11 y el que sería de aplicación en la actualidad.

La antigua Comisión Europea de Derechos Humanos según el antiguo artículo 25 del antiguo CEDH tiene la competencia de conocer toda demanda individual remitida al Secretario general del Consejo de Europa, quien tenía la función de recepción y del estudio previo de las comunicaciones, analizaba si la demanda cumplía los requisitos de admisibilidad y tenía competencia para decidir la admisión o inadmisión regulado en el artículo 20 de la antigua CEDH. Si la demanda es declarada admisible por la Comisión realizará un examen contradictorio de la demanda en presencia de los representantes de las partes y si fuera necesario una investigación con la colaboración de los Estados interesados para tener un buen resultado para determinar correctamente los hechos. Además, tenía atribuido funciones de conciliación, tras la admisión de la demanda que permitía el acceso a un arreglo amistoso entre las partes recogido en el antiguo art. 28 del CEDH. Si se llega a un acuerdo entre las partes la Comisión procedía a redactar un informe que se ponía en conocimiento de los Estados interesados, el Comité de Ministros y el Secretario general del Consejo de Europa para ser publicado. (art. 30 antiguo CEDH).²⁰

Si no se llegaba a un acuerdo amistoso se llevaba a cabo la redacción de un informe por parte de la Comisión en el que determinaba los hechos y exponía en un dictamen si los hechos analizados eran constitutivos de una violación de los derechos y libertades recogido en el CEDH

MORTE GÓMEZ, C., *Cómo presentar una demanda...*cit.p.66

²⁰ ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO F., «Perfecciones e imperfecciones en el protocolo 11 al Convenio Europeo DE Derechos Humanos y otros comentarios a propósito de su entrada en vigor (I-XI-1998)», *Revista Española de Derecho Constitucional*, n°. 56. Mayo-agosto 1999, pp.135-152.

SÁNCHEZ PATRÓN J.M, «El Recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Evolución y Perspectiva», *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, n°. 18/2º Semestre 2011. pp 167 – 190.

por parte del Estado interesado. Este dictamen era entregado al Comité de Ministros y Estados interesados que no podrá ser publicado por estos sujetos. (art. 31 antiguo CEDH).

Se dotaba de un plazo de tres meses desde la transmisión al Comité de Ministros del dictamen de la Comisión Europea, la posibilidad de que el asunto fuere enjuiciado por parte del TEDH por interés de la Comisión, de un Estado Parte cuando un nacional suyo fuese víctima de una violación de este CEDH, o que hubiese iniciado el caso ante la Comisión o que hubiese sido demandado. Si en este plazo no era enviado al TEDH, el Comité de Ministros gozaba de poder de decisión a través de una votación si existe violación o no del Convenio.

El TEDH para el examen de un asunto, se organizaba en una Sala formada por nueve jueces titulares y cuatro suplentes. Los Magistrados que formaban parte de la Sala de oficio eran el Presidente y Vicepresidente del TEDH y el Juez del Estado demandado. A través de un sorteo se llevaba a cabo la designación del resto de Magistrados que constituían la Sala, que se intentaba realizar de forma que se produjera una representación del conjunto de los Estados Miembros del Consejo de Europa. (art.21 del antiguo RTEDH).

Tras la constitución de la Sala, todos los jueces tenían a su disposición una copia de la demanda y del informe redactado por la Comisión. El presidente del TEDH llevaba a cabo la organización del procedimiento, estableciendo los plazos para presentar conclusiones, documentos de interés y las pretensiones de reparación formuladas en concordancia con el art.50 del CEDH. Una vez finalizada el período escrito, tras la consulta realizada a las partes, el Presidente establecía el día para celebrar el juicio oral.

En el juicio oral comparecían el delegado de la Comisión Europea que, aunque no es parte en el procedimiento defendía la tesis que apoyaba su informe, el demandante o representación letrada y el abogado y el agente del Estado que ha sido demandado.

La Sala podía aceptar la declaración de cualquier otro sujeto que pudiera tener interés para la resolución del caso tanto de oficio como a instancia de parte.

De todas las intervenciones durante el juicio oral estaban recogidas en el acta de la audiencia de forma escrita. En la misma semana de la celebración de la vista oral se fijaba una fecha para que la Sala pudiera deliberar. La primera cuestión que el Tribunal analizaba es si el caso que debían resolver alguna cuestión grave o nueva en relación con la interpretación o aplicación del Convenio. Si se encuadraba en uno de estos supuestos la Sala podía declinar su

competencia en favor de la Gran Sala cuando la solución que se aplica en ese supuesto era contraria a la jurisprudencia anterior.²¹

La Gran Sala podía ser constituida a petición de una de las partes en el proceso sin que se oponga ninguno de los comparecientes. Tras oír a las partes tomaba la decisión de si convocar una nueva audiencia, de la necesidad de solicitar información complementaria o elemento de prueba, o se llevaba a cabo la deliberación sin ningún trámite intermedio.

Independientemente de si el asunto es examinado por la Sala o la Gran Sala se lleva a cabo un intercambio de la evaluación de los hechos y el derecho y se procede a realizar un voto provisional. De los resultados obtenidos se obtenía una decisión mayoritaria sobre la existencia de violación o no del CEDH y si es posible que el individuo sea susceptible de satisfacción equitativa. Se realiza la redacción de un proyecto de sentencia en concordancia con las decisiones tomadas en esta primera deliberación, por un grupo de jueces entre ellos, dos o tres jueces que han tomado la decisión mayoritaria con la asistencia del juez del Estado que ha sido objeto de la demanda.

Durante el mes siguiente se reúnen dos o tres veces este grupo de jueces para revisar el contenido y redacción de la sentencia. Posteriormente se hacía entrega de una copia de la sentencia de la Sala y la Gran Sala para que propongan modificaciones o mejoras y en la próxima reunión se procedía a votar de forma concluyente el texto de la sentencia. Los jueces que habían tenido un voto distinto al de la mayoría podían redactar su opinión de forma separada que se aportaba como un anexo a la sentencia. Tras la publicación de la sentencia era remitida al Comité de Ministros para que proceda a asegurarse que se ejecuta la sentencia por el Estado implicado en el asunto.

El Comité de Ministros tenía el poder de decidir si el asunto que se estaba analizando había una violación del CEDH cuando en el plazo de tres meses desde la puesta a disposición del informe de la Comisión Europea al Comité de Ministros, el asunto no había sido puesto a disposición del TEDH. Tras el transcurso del plazo de los tres meses que esté órgano elegía el plazo en el que la parte contratante debía decidir cómo actuar respecto de la decisión que se había tomado. También tenía competencia para realizar recomendaciones o requerimientos, posibilitando la publicación del informe una vez haya finalizado el plazo establecido para

²¹ Fuente: <https://www.ucm.es/ideir> Última visita el 19 de noviembre de 2019

RUILOBA ALVARÍO J. «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Organización y Funcionamiento», *Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica*. nº 1, 2006, pp. 56- 68.

cumplir la obligación derivada de su decisión, ya que los Estados deben comprometerse a aceptar la decisión adoptada.

En 1993 el Comité de Ministros del Consejo de Europa dictaminó la necesidad de proceder a realizar una reforma del sistema de protección establecido en el CEDH.

El Protocolo nº 11 al CEDH relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio fue aprobado por la Asamblea Parlamentaria el 11 de mayo de 1994 y las ratificaciones de los Estados Contratantes comenzaron tres días más tarde.

Este Protocolo entraba en vigor el primer día del mes siguiente del transcurso de un año desde la fecha de ratificación del último Estado contratante. La última ratificación se realizó por Italia el mes de octubre de 1997, por lo tanto, las reformas establecidas en este Protocolo comenzaron a ser de aplicación el 1 de noviembre de 1998.

El objeto de reforma de este Protocolo era reducir la duración de los procedimientos ante el TEDH y seguir manteniendo una protección cierta de los derechos humanos. Era muy preocupante que los órganos competentes de proteger los derechos recogidos en el Convenio declaraban que había una violación del derecho a un procedimiento equitativo por el tiempo excesivo de duración de un procedimiento judicial en los Estados Parte y que tardarán un plazo de 5 años en resolver los casos que le eran presentados.²²

La reforma no modifica el contenido de los derechos y libertades fundamentales reguladas en el CEDH y en los protocolos. Las modificaciones realizadas son de materia procesal y relativa a la competencia de los órganos que forman parte de la CEDH.

Al TEDH se le asignaron todas las competencias que anteriormente fueron asignadas a la Comisión Europea: la recepción de las demandas, examen previo, examen de admisibilidad, determinación de los hechos y su competencia para que las partes llegaran a un acuerdo amistoso. Perdiendo el Comité de todo poder decisorio que tenía precedentemente, pero sigue

²² Protocolo nº11 del Convenio Europea de Derechos Humanos y Libertades Públicas relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio en su exposición de Motivos argumenta que: «Considerando que es necesario y urgente reestructurar el mecanismo de control establecido por el Convenio, con el fin de mantener y reforzar la eficacia de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales prevista por el Convenio, a causa principalmente del aumento de las demandas de protección y del número creciente de miembros del Consejo de Europa; Considerando que procede modificar, en consecuencia, ciertas disposiciones del Convenio con objeto, en especial, de sustituir la Comisión y el Tribunal europeos de Derechos Humanos actuales por un nuevo Tribunal permanente»

SIGNES DE MESA, J. I., Derecho procesal *cit.*, pp. 525 y ss.

teniendo competencia en el seguimiento y control de la ejecución de la sentencia que es definitiva.

Otra de las modificaciones llevadas a cabo por este Protocolo fue en materia de la legitimación activa del demandante que no era un Estado Parte. Al demandante individual no le permitía interponer de forma directa ante el TEDH una demanda, dotándoles únicamente la posibilidad a la Comisión Europea y a los Estados Contratantes según lo regulado en el artículo 44 del antiguo CEDH.

Fue acordada la necesidad de revisar esta cuestión en el Protocolo nº9 que fue aprobado en noviembre de 1990, reconocía a la persona física, a la organización no gubernamental o al grupo de particulares dotaba la posibilidad de petición a un Comité formado por tres jueces que su caso fuera enjuiciado por el TEDH. El Comité podía denegar la petición de forma unánime, pero esta posibilidad se dotaba únicamente a los sujetos con nacionalidad de los Estados Miembros que hubieran ratificado y firmado este protocolo que tuvo una duración escasa, ya que fue derogado por la aplicación del Protocolo nº 11.

El Protocolo nº 11 produjo una modificación en el concepto de legitimación activa de los demandantes individuales que proporciona la posibilidad de demandar a un Estado contratante e impone al Estado la no obstaculización del ejercicio eficaz de los derechos humanos.²³

El TEDH en la actualidad, tiene todas las competencias en lo relativo a la interpretación del Convenio y sus Protocolos, independientemente que sean demandas individuales o interestatales, añadiendo una función consultiva solicitada por el Comité de Ministros sobre la interpretación del CEDH y si es necesario dicta un informe motivado.

El TEDH es un órgano permanente que se compone de tantos jueces como Estados Contratantes forman parte del CEDH (art.20 CEDH). Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de tres candidatos presentados por cada Estado Miembro. (art. 22 CEDH).

Cada uno de los candidatos presentados será sometido a una evaluación ante un Comité que determinará de evaluar su experiencia y conocimiento en materia de Derechos Humanos, deben acreditar tener un buen nivel de inglés y francés al ser los idiomas oficiales utilizados y

²³ SÁENZ DE SANTA MARÍA P.A. *Sistema de Derecho Internacional Público*, 5ª Edición, Civitas, Navarra, 2018

acreditar el conocimiento de una lengua más y tras la entrevista realizada formulará una recomendación a la Asamblea Parlamentaria.

Los jueces que forman parte del Tribunal elegidos por la Asamblea Parlamentaria, a pesar de que son elegidos a partir de una propuesta de un Estado, estos jueces tienen independencia y no representan al Estado proponente. Son independientes y no pueden actuar en ninguna situación que no esté conforme a su deber de independencia e imparcialidad. Entre las actividades prohibidas para los jueces están la actividad política o administrativa, toda actividad incompatible con los principios que rigen su actividad la imparcialidad e independencia y que afecte a su disponibilidad para llevar a cabo sus funciones a tiempo completo. Si un juez realiza una actividad adicional informará al presidente del Tribunal. (art.21 CEDH). Además, también tienen prohibido los antiguos jueces representar a una de las partes que intervenga ante TEDH mientras aun estuviera en funciones y durante los dos años posteriores a su cese no pueden actuar como abogados de las demandas presentadas tras su cese (art.4 RTEDH).

La resolución CM/ RES (2010) 26, adoptada el 10 de noviembre de 2010 por el Comité de Ministros, en sus conclusiones determinó que una comisión consultiva opinará sobre si los candidatos presentados por cada uno de los Estados cumplen con los requisitos exigidos por el art. 21 del CEDH. La comisión formada por 7 jueces elegidos entre los jueces de altos tribunales nacionales, antiguos jueces del TEDH o juristas con reconocida competencia elegida por el Comité de Ministro previa consulta al presidente del TEDH.

El tribunal para examinar las demandas utiliza diversas formaciones: a través de un juez único, en Comités de tres jueces, en Salas de siete jueces y la Gran Sala. (art. 26.1 CEDH).

El juez único tiene competencia para resolver una inadmisión de una demanda cuando no sea necesario un examen adicional. Esta decisión será definitiva. En el caso de que no se declare la inadmisión el juez único remitirá esta demanda al Comité o a una Sala para que sea examinada por estos. (art.27 CEDH).²⁴

El Comité de tres jueces puede inadmitir o archivar una demanda de plano si la resolución se podía acordar sin un examen complementario y pueden declarar la inadmisibilidad y sobre el fondo de esta por unanimidad cuando exista jurisprudencia consolidada del Tribunal. La jurisprudencia consolidada se entiende como sentencias repetitivas que ya se ha dictado una

²⁴Fuente: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.165-186.pdf.)Última visita el 11 de noviembre de 2019.

sentencia piloto, es decir jurisprudencia constante de las Salas y también pueden ser consideradas las sentencias emitidas por la Gran Sala. El Estado demandado tiene la posibilidad de oponerse que un asunto sea enjuiciado por el Comité alegando que la jurisprudencia consolidada no es aplicable al caso o existe algún problema relativo a la admisibilidad de la demanda. La sentencia debe ser acordada por unanimidad sino el asunto será remitido a la Sala. El juez que forma parte del Comité que haya sido elegido por el Estado contratante que ha sido demandado, no podrá formar parte del Comité. Estas sentencias tienen carácter definitivo por tanto no pueden ser examinadas por la Gran Sala.

La Sala de siete jueces se organizan por secciones de nueve o diez jueces, en la actualidad están compuestos por cinco secciones en la que su composición debe ser equilibrada desde el punto de vista geográfico como de la representación de sexos y los diferentes sistemas jurídicos existentes. En el supuesto de que un juez no pueda actuar o se inhíba se elegirá un juez ad hoc (art.29 RTEDH). Los jueces de una Sala son elegidos por un sistema de rotación dentro de la sección (art.26 RTEDH). La sala examina los asuntos en los que no tenga competencia el juez único o el Comité haya remitido a la Sala o no hubiera obtenido unanimidad en la resolución.

La Gran Sala de diecisiete jueces conoce de los asuntos en los casos que la Sala se inhíbe antes de dictar sentencia. Son asuntos relativos a una duda grave sobre la interpretación del CEDH o puede crearse jurisprudencia contraria a la que ya existe. (art.30 del CEDH).

Este órgano también tiene competencia para conocer los asuntos en los cuales la Sala ha dictado Sentencia y esta ha sido remitida a la Gran Sala (art.43 RTEDH). La petición de remisión será examinada por un Colegio de Cinco jueces examinará la solicitud, si este órgano entiende que existe una cuestión grave relativa a la interpretación del CEDH o de carácter general el asunto se remitirá a la Gran Sala que resolverá a través de una sentencia, si por el contrario no acepta la petición se informará la inadmisión a las partes sin hacer mención a las causas, salvo que se trate de defectos de forma.²⁵

Otro de los órganos que examinan las demandas interpuestas ante el TEDH, que debe ser examinada por la Sala o por un Comité, el presidente de la Sección a la que se le haya destinado el estudio de un asunto elegirá a un juez ponente el que podrá solicitar información sobre los hechos, documentos para el examen del asunto. Este juez redactara informes,

²⁵ Fuente: <https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/an196.doc>. Visita el 28 de noviembre de 2019.

borradores y otros elementos que puedan ser útiles para realizar sus funciones por parte de la Sala o al Comité. Su identidad no se hace pública.

4. PROCEDIMIENTO ANTE EL TEDH.

Tras la presentación de una demanda ante el TEDH, hay un orden establecido para examinar la demanda regulado en el art.41 RTEDH en relación con la importancia y la urgencia de las cuestiones planteadas en el recurso, a través de unos criterios definidos por el TEDH. Dentro de los supuestos de urgencia e importancia se encuentran los casos en los que esté en peligro la vida o la salud del demandante, o que la cuestión verse sobre los intereses de un menor, o una cuestión de interés general. Dentro de cada categoría el tratamiento de las demandas es por orden cronológico de presentación.

Como inicio tras la presentación de la demanda se realiza un primer examen de la demanda en el que se puede estimar la inadmisión de plano o una comunicación a las partes del litigio diferenciando la actuación dependiendo que formación tiene competencia para analizar el caso y posteriormente si la demanda no es inadmitida se llevará a cabo un análisis sobre la admisibilidad y el fondo del asunto, aportando como anexo nº1 y nº2 de un esquema del recorrido que lleva a cabo una demanda ante el TEDH.

4.1 Primer examen de la demanda

Si en este primer examen se determina que la demanda es inadmisibile o que debe archivarse será competente para tramitar la demanda el Juez Único que enviará una carta a la parte demandante determinando la fecha en la que se tomó la decisión, el juez único que inadmitió la demanda y el motivo de la inadmisibilidad (art.52 A RTEDH). No se podrán dar más precisiones sobre las causas de inadmisión, ni tendrán respuestas las cartas enviadas posteriormente a la decisión tomada. Que está decisión es firme y no pueden ser objeto de recurso.

En el caso que el Juez único no inadmitiera o no archivará la demanda, por creer necesario un examen más detallado del tema remitirá la demanda para que sea examinada por un Comité o por una Sala.

El examen realizado por un Comité puede declarar la inadmisión o archivo de la demanda por unanimidad cuando pueda declararse sin un examen posterior de una demanda

que no ha sido inadmitida por el Juez único y en los casos que exista jurisprudencia consolidada pueden declarar conjuntamente la inadmisión y resolver las cuestiones sobre el fondo.

Si el juez ponente determina que la demanda en este primer examen no es manifiestamente inadmisibile en este primer examen, tiene la posibilidad de que el Presidente de la Sección comunique la demanda al Estado demandado de la existencia de la demanda y que es posible que se haga un examen conjunto sobre la admisibilidad y el fondo. (art.54.2 b) y 54 A del RTEDH).

El Presidente de la Sección puede determinar que alguna de las quejas propuestas en la demanda son inadmisibles en el momento de realizar esta comunicación. Ambas partes recibirán la exposición de los hechos, las quejas que han sido admitidas y cuáles de ellas no se han admitido. (art. 27A y 54 RTEDH). Estas demandas comunicadas por el Presidente de la Sección que se conoce que van a ser examinadas por un Comité es que existe jurisprudencia consolidada y no es necesaria la aportación de observaciones por ninguna de las partes.

Desde la notificación de la existencia de la demanda el TEDH se pone en disposición de las partes para llegar a un acuerdo amistoso, pudiendo el TEDH formular propuestas concretas para facilitar que las partes lleguen a un acuerdo, si las partes llegan a un acuerdo se procederá al archivo del procedimiento.

Si el acuerdo no se hace efectivo el Estado contratante demandado podrá presentar observaciones sobre las quejas reconocidas en la comunicación de demanda, estas observaciones serán enviadas a la parte afectada con una función informativa y se le informará de la posibilidad de interponer una demanda de satisfacción equitativa.

La obligación de representación letrada es obligatoria tras la comunicación de la demanda cuando va a ser estudiada por la Sala, por tanto, no es necesaria en el supuesto analizado.²⁶

Si la demanda que ha sido comunicada, el Comité entiende que no es necesaria su resolución mediante sentencia declarará la demanda inadmisibile o archivarla. Si el Comité decidiera que la sentencia no es inadmisibile dictará sentencia que debe ser unánime, definitiva que no es susceptible de ser remitida a otro órgano. Si el Comité no dictara sentencia ni resolución remitirá la demanda a la Sala.

²⁶MORTE GÓMEZ, C., *Cómo presentar una demanda...*cit.p.78.

El examen llevado a cabo por la Sala será sobre demandas remitidas por el Comité o cuando la inadmisión necesite un razonamiento más fundamentado o de una motivación más compleja. La inadmisión será declarada de forma motivada, a través de un borrador realizado por el Juez Ponente aplicando la documentación que haya sido necesaria.

Si no se declara inadmisibile se comunicará la existencia de la demanda a las partes para que posteriormente presenten sus observaciones respetando el principio de contradicción.

Las comunicaciones realizadas por los casos examinados por las Salas, se incluyen cuestiones precisas sobre la presunta violación invocada por la parte demandante o de algún artículo del Convenio. Se permite el examen conjunto de la admisibilidad y del fondo del asunto en una única sentencia que tratará previamente los asuntos relativos a la admisibilidad. La decisión de tratar de forma conjunta ambas cosas se debe hacer en el momento de la comunicación de la demanda

4.2 Examen sobre la admisibilidad y el fondo del asunto

Una vez realizada la comunicación de la demanda por el Comité o la Sala se llevará a cabo un examen sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.

En esta fase del procedimiento si la demanda se entiende que es admisible, se inicia una negociación para poder obtener un acuerdo amistoso.

Cualquiera de las partes puede presentar una propuesta de acuerdo amistoso, si la parte contraria acepta y este acuerdo respeta los derechos humanos como están protegidos en el CEDH y sus protocolos, no será necesario que se analicen las observaciones propuestas en materia de admisibilidad y respecto al fondo del asunto. La Sala procederá al archivo del asunto a través de una Decisión en la que se hará una breve mención sobre los hechos y el acuerdo acordado. Esta decisión será comunicada al Comité de Ministros que controlará que se cumple el acuerdo en los términos relatados en la Decisión. (art 43.3 RTEDH). Cabe la posibilidad que el tribunal actúe en los casos repetitivos en los que exista jurisprudencia consolidada, redactando una propuesta de acuerdo amistoso con las cifras acordadas en otros casos similares como satisfacción equitativa, este acuerdo es enviado a ambas partes. Para que este acuerdo sea aceptado el Secretario siguiendo las instrucciones que le impongan la Sala o de su Presidente se pondrá en contacto con las partes y tomará las medidas necesarias para finalizar el mismo.

Si ambas partes están conformes con la propuesta la enviarán firmada y se redactará la decisión de archivo de esta.

En el caso de que el demandante no acepte la propuesta de acuerdo amistoso redactada conforme con la jurisprudencia del TEDH de forma arbitraria, el Estado puede pedir el archivo de la demanda en virtud del art.37.1 del CEDH. La solicitud estará complementada con una declaración unilateral reconociendo la existencia de una violación del CEDH y el compromiso del Estado de llevar a cabo una reparación conveniente y que adoptará las medidas coercitivas necesarias. (art.62 RTEDH).

El archivo de la demanda puede producirse por otros motivos como que el demandante haya desistido de proseguir con el procedimiento, que se hubiera resuelto el litigio o cualquier otro motivo verificado que justifique que no se debe continuar con la demanda por el TEDH.

Sino se llega a un acuerdo la Sala dicta una sentencia sobre el fondo del asunto. Previo a dictar sentencia tiene el Tribunal la posibilidad de celebrar una audiencia, aunque es una actuación excepcional ya que normalmente todo el procedimiento se realiza por escrito.

La vista es pública y contradictoria salvo que excepcionalmente la sala decida otra cosa en virtud del art.63.2 del RTEDH. El acceso puede ser restringido por razones de orden público, seguridad nacional, cuando estén en juego los intereses de un menor, para proteger la vida privada de las partes o cuando la publicidad pueda afectar a los intereses de la justicia.

Las partes expondrán sus observaciones en la vista y posteriormente los componentes de la Sala realizarán preguntas a los intervinientes en los idiomas oficiales. Al terminar la vista se levanta un acta en la que recogen los componentes de la Sala, los nombres de los comparecientes, las observaciones efectuadas, las preguntas realizadas y las respuestas y decisiones adoptadas en la vista. Esta acta será firmada por el Secretario y el Presidente de la Sala.

Tras la celebración de la vista, el TEDH puede archivar el asunto tras analizar las observaciones realizadas por las partes dando fin al procedimiento.

Sino se consigue un acuerdo amistoso o una declaración unilateral, el TEDH procederá a dictar sentencia sobre la admisibilidad y sobre el fondo del asunto según lo recogido en el art. 29 CEDH. Sino se llevará a cabo un procedimiento conjunto que ocurre de forma excepcional, la Sala declarará la admisibilidad de la demanda en su totalidad o parcialmente. Y el Tribunal de la parte declarada admisible por la Sala dictará sentencia después de que las partes vuelvan a realizar sus observaciones.

Puede que el asunto sea estudiado por la Gran Sala cuando la Sala se inhiba por estar conociendo un caso de cuestiones graves de interpretación del CEDH o que la resolución pudiera ser contraria a la jurisprudencia del TEDH, salvo que una de las partes se oponga en virtud del art.72 RTEDH motivando su oposición y que la oposición se comunique en el plazo de 1 mes desde que se produzca la comunicación de la inhibición. La Sala no está obligada a fundamentar su inhibición únicamente debe realizar la comunicación si haber entrado a analizar el fondo del asunto. Otra de las ocasiones en las que la Gran Sala conoce de un asunto es cuando una de las partes solicita el reenvío a este Tribunal a partir de la emisión de la sentencia de la Sala dentro de los tres meses siguientes mostrando cual es la cuestión grave de aplicación del CEDH o cual es la cuestión de carácter general que debe ser examinada por la Gran Sala. Esta solicitud será presentada ante el colegio de cinco jueces de la Gran Sala (art.24.5 RTEDH), si este órgano decide inadmitir la solicitud se comunicará a los interesados sin obligación de motivación. Si decide retener la solicitud, la Gran Sala resolverá a través de una sentencia. (art.73 RTEDH).

El análisis que realiza la Gran Sala es sobre la totalidad de la sentencia que había dictado la Sala, no cabe la posibilidad de un reenvío parcial. alguna de las distinciones del examen del caso por este Tribunal es que se presentan memorias escritas que conforman o completan lo dicho ante la Sala. El procedimiento es el mismo que el llevado a cabo ante la Sala. El procedimiento es bilingüe, frente al uso de un solo idioma que realiza la Sala. Las sentencias de la Gran Sala se emiten en los dos idiomas oficiales y ambas se consideran auténticas y estas sentencias se dictan mediante lectura pública en vez de por escrito.

La sentencia deberá contener: identificar el Presidente y el del resto de miembros del Tribunal que formen la Sala o el Comité y el Secretario, la fecha de adopción y el día del pronunciamiento, la identificación de las partes y de sus representantes, síntesis del procedimiento llevado por el Tribunal, los hechos y resumen de las observaciones de las partes, los fundamentos de derecho, el fallo, decisión en relación con los gastos y las costas. El número de jueces que forman la mayoría, indicación del texto autentico en el caso de que se haya realizado una traducción en uno de los idiomas que no sea el oficial.

Las sentencias son definitivas cuando las partes que no acudirán a la Gran Sala o cuando pasan los tres meses para solicitar el reenvío del asunto a la Gran Sala y cuando son sentencias emitidas por los Comités y de la Gran Sala son definitivas desde el momento que se dictaron.²⁷

²⁷ SIGNES DE MESA, J. I., *Derecho procesal* cit. pp. 525 y ss

5. LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

Los requisitos de admisibilidad de la demanda están recogidos en el art. 35 del CEDH, la importancia de conocer estos requisitos se basa en que una vez el Tribunal determina que una demanda es inadmisibile no entra a valorar si existe una violación de un derecho fundamental, es decir, no lleva a cabo un análisis sobre el fondo del asunto.

5.1 Causas de inadmisión por razón del procedimiento.

A) No agotar las vías internas de recurso

El requisito de agotar las vías internas de recurso está regulado en el artículo 35 del CEDH este es un principio del derecho internacional público. El TEDH tiene una función subsidiaria respecto a los tribunales del derecho interno que tienen la posibilidad de solucionar los problemas que tengan sobre la compatibilidad del Derecho interno con el CEDH.²⁸

Por tanto, dota a los tribunales de un Estado contratante la competencia de solucionar las supuestas violaciones del CEDH. El Estado Miembro está obligado a tener una vía efectiva de recurso contra la violación de los derechos humanos recogidos en el CEDH. (art.13 CEDH).²⁹

El agotamiento de las vías de recurso internas es un elemento fundamental para lograr una verdadera protección de los derechos humanos y se entiende que es un derecho fundamental en la STEDH (Gran Sala), Decisión, Demopouluos y otros c. Turquía, nº 46113/99, del 1 de marzo de 2010.³⁰ La aplicación de esta regla debe ser flexible, no siendo de aplicación de forma automática.

Los demandantes deben conocer las vías de recurso que ofrece su estado y aplicarlas de forma correcta, por ello si un recurso es inadmitido por un error procesal se entiende que no ha agotado las vías internas como se ve reflejado en la STEDH (Gran Sala) Gafgen c. Alemania, nº 22978/05, de 1 de junio del 2010.³¹

²⁸ Fuente: <http://www.echr.coe.int> Última visita el 29 de noviembre de 2019.

MORTE GÓMEZ, C., *Cómo presentar una demanda....cit.*p.80.

²⁹ Fuente: <https://www.ancmip.org.ar/user/files/02-Santiago13.pdf>. Última visita el 12 de noviembre de 2019.

IGLESIAS VILA M. «Subsidiariedad y tribunales internacionales de derechos humanos: ¿deferencia hacia los estados o división cooperativa del trabajo?», *Revista de la Facultad de Derecho*, nº79,2017, pp.191-222

³⁰ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-97649> Última visita el 16 de octubre de 2019.

³¹ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-99015> Última visita el 26 de octubre de 2019.

Pero si el Tribunal examina el recurso de apelación, aunque este sea declarado inadmisibile, es decir que el Tribunal examina el fondo del asunto, aunque sea de forma muy superficial se entiende que este requisito esta cumplido.

Si el Estado tiene varias vías de recurso que son efectivas para velar contra las violaciones de los derechos recogidos en el CEDH, el demandante no está obligado a utilizar ambas vías de recurso, con la utilización de una de ellas es suficiente para entender que se ha cumplido este requisito. (STEDH (Sección Segunda) Moreira Barbosa c. Portugal, nº 65681/01, de 21 de diciembre de 2010).³²

En estas vías de recurso se debe hacer mención del Derecho que ha sido vulnerado de forma sustancial sin necesidad de que en el procedimiento interno se haga mención explícita de la regulación internacional. (STEDH (Sala) Castells c. España, nº 11798/85, de 23 de abril de 1992)³³

Es decir que el demandante ha debido formular la violación de un derecho nacional o usar los medios adecuados para que el Derecho interno tuviera la posibilidad de sufragar la violación declarada. (STEDH (Sección Primera), Karapanagiotou y otros c. Grecia, nº1571/08, de 28 de octubre de 2010)³⁴

La parte demandante tiene la obligación de agotar las vías de recurso internas únicamente cuando sean efectivas y disponibles, cuando se produjeron los hechos por los que tuvieran acceso a ellas y pudieran darles una reparación de sus quejas y tuvieran posibilidad de ganar el recurso. (STEDH (Gran Sala), Sejdivic c. Italia, nº 56581/00 de 1 de marzo de 2006).³⁵

Las vías de recurso extraordinarias, en las ocasiones que la revisión del asunto lo lleva a cabo el mismo órgano jurisdiccional, las vías de recurso en las que interviene un intermediario y que no da el acceso de forma directa al demandante o la vía de recurso que no tenga un plazo preciso provocando incertidumbre, son vías de recurso que no son consideradas efectivas y disponibles por ello el demandante no está obligado a interponer estos recursos.

Quien debe probar que el demandante no ha agotado las vías de recurso internas es el Estado contratante basándose en que no utilizo un recurso eficaz y admisible. (STEDH(Sala), Dalia c. Francia, nº 26102, de 19 de febrero de 1998).³⁶La vía de recurso debe estar claramente

³² Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-67740> Última visita el 14 de noviembre de 2019.

³³ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164610> Última visita el 16 de octubre de 2019.

³⁴ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-101361> Última visita el 3 de diciembre de 2019.

³⁵ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-184258> Última visita el 10 de diciembre de 2019.

³⁶Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-58130> Última visita el 16 de octubre de 2019.

prevista en el derecho interno. (STEDH (Sección Cuarta), Scauvuzzo-Hager y otros c. Suiza, nº41173/98, de 7 de febrero de 2006)³⁷

El Estado para que sus argumentos estén adecuadamente justificados debe aportar jurisprudencia nacional de aplicación al caso, que esta debe ser anterior a la interposición de la demandada. y de aplicación al caso que se está enjuiciando. (STEDH (Sección Cuarta), Caso Norbert Sikorski c. Polonia, nº 17599/05, de 22 de octubre de 2009)³⁸

Tras que el Estado ha justificado que el demandante no había agotado las vías de recurso interno, el demandado debe probar la postura contraria, que si ha agotado la vía de recurso o que esa vía de recurso es ineficaz o inapropiada para el caso.³⁹

El cumplimiento de este requisito es revisado en la fecha de presentación de la demanda ante el TEDH, el Tribunal permite que la resolución del recurso se emita poco después de la presentación de la demanda, pero siempre antes que el TEDH emita un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda. (STEDH (Sección 2), Karoussiotis c. Portugal, nº 23205/08, de 1 de febrero de 2010)⁴⁰

En este caso concreto frente a la resolución de la Audiencia Provincial de condena del Sr. T.J se interpone un recurso de casación fundamentado en la interposición de un recurso de reforma fuera de plazo, por vulneración de un derecho fundamental regulado en el art. 582 de la LECrim.

El recurso de casación es un recurso extraordinario, es decir se puede interponer por motivos tasados, devolutivo, suspensivo y se puede interponer contra sentencias firmes y contra algunos autos. La competencia para conocer del recurso de casación le corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Hay que resaltar que, aunque se estableció una reforma de LOPJ a través de la LO 19/2013, había instaurado la doble instancia en materia penal, pero esta no era efectiva porque no había una ley procesal que regulara esta segunda instancia.

³⁷ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-72323> Última visita el 22 de noviembre de 2019.

³⁸ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-95317> Última visita el 5 de diciembre de 2019.

³⁹ Fuente: <https://www.abogacia.es/2015/03/26/requisitos-de-admisibilidad-de-la-demanda-ante-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos> Última visita el 24 de noviembre de 2019

⁴⁰ LASAGABASTER HERRARTE, I.; LAZKANO BROTONS, Í. *Convenio Europeo de Derechos Humanos: comentario sistemático.*, 3ª edición, Civitas, Navarra, 2015.

Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-103165> Última visita el 5 de diciembre de 2019.

En el art.14.5 PIDCYP y el art. 2 del CEDH, el Protocolo nº 7 reconocía el derecho a una segunda instancia en materia penal.

Pero este recurso tiene control sobre la aplicación del derecho sustantivo, en este caso nos interesa mencionar que permite conocer cualquier vulneración en el ámbito de los DDFF. (art 852 LECrim).

El Tribunal Supremo dictará una nueva sentencia sobre el fondo del asunto, que anula la resolución anterior, dotando al ciudadano de una reparación inmediata de la lesión jurídica sufrida.

El recurso se entiende que es efectivo, en el sentido del PIDCYP y La CEDH, pues da la posibilidad de un segundo examen sobre el asunto de las cuestiones que se puedan revisar por un órgano jurisdiccional superior, que además tiene competencia de revocar y dictar el mismo una nueva sentencia.

Por tanto, de lo dicho se puede entender que es un recurso efectivo para proteger la vulneración al derecho a la tutela efectiva que fue inadmitido, resolviendo que era un simple vicio en el procedimiento la interposición del recurso fuera de plazo razonando sobre el fondo.⁴¹

Una vez es inadmitido el recurso de casación, el demandante interpone un recurso de amparo fundado en las mismas alegaciones hechas en el recurso previo.

La primera cuestión que debemos resolver es si frente a la presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva es posible recurrir en amparo. No se puede interponer el recurso de amparo por la vulneración de cualquiera de los derechos recogidos en la CE. Se puede interponer frente a los derechos regulados en los arts. 14 a 29 de la CE y el art. 30.2 relativo a la objeción de conciencia. Entre todos estos derechos a los que se les reconoce la posibilidad de recurrir en casación se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva regulada en el art. 24 CE. Este recurso se puede interponer frente actuaciones jurídicas, omisiones o simplemente la actuación fuera de su competencia del Estado, CCAA y resto de entes públicos, omisiones de las que sean responsables cualquier tipo de autoridad, incluyendo a sus funcionarios. Pero no se puede recurrir en amparo frente las leyes.⁴²

⁴¹ Fuente: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79361.pdf>. Última visita el 15 de noviembre de 2019.

⁴² Fuente: [https://tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2013_Todo\(16-02-2017\).pdf](https://tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2013_Todo(16-02-2017).pdf). Última visita el 15 de noviembre de 2019

Como la violación del derecho fundamental deriva de la acción de un órgano judicial debe recoger las siguientes características: Se hayan interpuesto todos los recursos disponibles en las normas procesales para el asunto concreto en vía judicial, que esta violación sea consecuencia de forma directa de una actividad u omisión del Tribunal, sin tener en cuenta los hechos por los que se provocó la vulneración del derecho fundamental y que se haya dejado constancia formal de la vulneración de este derecho, si se tuvo oportunidad para ello. (art.44 LOTC).

Puede interponer este recurso cualquier persona física o jurídica que alegue un interés legítimo. (art.162.1.b de la CE). Una vez que sabemos que el derecho puede ser recurrido en amparo hay que determinar si existe una justificación sobre la especial trascendencia constitucional, que se determina a través de su importancia para la interpretación de la CE, para su aplicación, o que influirá en su eficacia y para delimitar su contenido y alcance.

Para que agotar una vía de recurso sea obligatoria su interposición en la perspectiva del TEDH debe ser efectiva y admisible que esta vía de recurso tenga una regulación consolidada y que sea aplicable en el contexto del Estado.

Existen dos supuestos en los que se entiende que no es necesario interponer este recurso:

Primero cuando de las inadmisiones del TC se concluya que ya ha sido analizado un asunto similar, porque exista doctrina jurisprudencial⁴³

Segundo cuando el quebrantamiento de los derechos fundamentales que se les reconoce la protección mediante el recurso de amparo no entre dentro de uno de los supuestos de especial trascendencia constitucional Los supuestos están recogidos en la STC (Pleno), nº 155/2009, de 25 de junio⁴⁴ son los siguientes:

- Que el recurso se fundamenta en una perspectiva del derecho fundamental sobre lo que no hay doctrina del TC

-Que este recurso dote la opción de aclarar o modificar su doctrina provocado por una reflexión interna, por la existencia de nuevas circunstancias sociales, por cambios en la regulación interna que sean importantes para determinar el contenido de los derechos

⁴³ PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL F., «El recurso de amparo Y el recurso ante el TEDH: Pautas de interacción» *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, nº 47, 2017, pp. 7-16

⁴⁴ Fuente: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6574> visita el 2 de noviembre de 2019.

fundamentales, por el cambio de doctrina de los órganos que garantizan la interpretación de los tratados.

- La violación que se alega, pueda producirse por una interpretación jurisprudencial de una ley que pudiera causar el daño a un derecho fundamental.

- Cuando la doctrina sobre un DDFF pueda estar siendo incumplida de forma repetida y genérica en el procedimiento ordinario o existan resoluciones contradictorias.

- Que el asunto concreto introduce una duda jurídica, que tiene una relevancia en el ámbito general por la repercusión social y económica.

- El asunto recurrido pueda tener consecuencias políticas generales.

Si el demandante no ha justificado la especial trascendencia constitucional del asunto, se puede entender que no se han seguido las normas y procedimientos internos que el TEDH entiende como una de las causas de inadmisibilidad por no agotar las vías internas.

Estos supuestos que recogen cuando hay una especial trascendencia constitucional no es una lista tasada, se pueden incorporar nuevos supuestos.

Hay que decir que existe la posibilidad de haber cumplido el requisito de agotar las vías internas de recurso cuando a pesar de no haber justificado la trascendencia constitucional, el TC hubiera dictado una resolución o auto tratando sobre el fondo del asunto.

Por todo lo expuesto anteriormente ambos recursos era obligatoria su interposición, ya que el recurso de casación ante el TS, resuelve sobre el fondo de asunto anulando la resolución anterior y dando una respuesta justificada sobre el daño causado y el recurso de amparo en España tiene competencia para dictar una resolución sobre la existencia de una vulneración de un DDFF, que se encuentra entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por el interesado y aunque ambos recursos son inadmitidos, el órgano jurisdiccional dicta sentencia razonando sobre el fondo. Ambos recursos son efectivos y admisibles.

B) Incumplimiento del plazo de interposición de la demanda ante el TEDH.

El plazo que tiene el demandante para interponer una demanda ante el TEDH es de seis meses a contar desde la fecha de la resolución interna definitiva. Este plazo se aplica para dotar de una seguridad jurídica, porque es un plazo suficiente para que el demandante pueda tomar la decisión de si interponer la demanda, cuáles son sus alegaciones y sus argumentos y la determinación de los hechos. Y desde el punto de vista del Estado la imposición de este plazo

evita que se esté poniendo en duda actuaciones del pasado que afectarían al orden, la estabilidad y la paz del Estado. (STEDH (Gran Sala), *Idalov c. Rusia*, nº 5826/03, de 22 de mayo del 2012)⁴⁵

Esta regla es exigible únicamente cuando la cuestión jurídica ha sido objeto de una resolución definitiva en el régimen interno. Es una regla que puede aplicar por el TEDH sin que sea necesario que se haya pedido a instancia de parte.

El plazo de los seis meses se empieza a contar desde la fecha en la que el demandante y su representante tienen conocimiento suficiente de la resolución interna definitiva. (STEDH (Sección Segunda), *Decisión, Koc y Tosun c. Turquía*, nº 23852/04, de 13 de noviembre del 2008)⁴⁶

Este conocimiento suficiente se entiende desde la notificación de la resolución al demandante cuando tiene derecho a la notificación de una copia de la resolución o a partir del momento en el que su abogado sabía que habían dictado la resolución que pone fin a la interposición de recursos internos, a pesar de que su cliente tuviera consciencia posteriormente. (STEDH (Sección Cuarta), *Celik c. Turquía*, nº 41993/98, de 27 de julio de 2004)⁴⁷

Si en la regulación interna no contiene la notificación de la resolución en ese caso, se debe tomar de partido la fecha de la resolución y el demandante debe probar su diligencia para obtener una copia de la resolución. (STEDH (Sección 4), *Olmez c. Turquía*, nº 39464/98, de 22 de febrero de 2007)⁴⁸

Si el demandante no tiene posibilidad de interponer ningún recurso efectivo, el plazo de los seis meses se empezará a contar desde la fecha de los actos denunciados o desde que la parte tuvo conocimiento del acto o de sus efectos adversos. (STEDH (Gran Sala) *Varnava y Otros c. Turquía*, nº 16064/95, de 18 de septiembre de 2009)⁴⁹

El computo del plazo de los seis meses se contabiliza en conformidad con los criterios propios del CEDH, con independencia de la regulación interna de los Estados así dotan de una mayor seguridad jurídica al procedimiento.

⁴⁵Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-110986> visita el 4 de noviembre de 2019.

⁴⁶ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-89924> visita el 4 de noviembre de 2019.

⁴⁷ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-61945> visita el 4 de noviembre de 2019.

⁴⁸ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-79511> visita el 4 de noviembre de 2019.

⁴⁹ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-119653> visita el 4 de noviembre de 2019.

La demanda se entiende presentada desde que se envía el formulario de demanda debidamente rellenado, con las copias de los documentos justificativos necesarios según el artículo 47 RTEDH, dando fe de esto el sello de correos estampado. (STEDH (Sección Primera) Brezec c. Croacia, nº7177/10, de 18 de julio de 2013)⁵⁰

Si se plantean quejas que no fueron planteadas en la demanda presentada, el plazo de seis meses se interrumpe en la fecha que se presentó la queja por primera vez a un órgano del CEDH. Las quejas enviadas fuera de plazo únicamente serán analizadas si su objeto versa sobre particularidades de las quejas planteadas en la demanda inicial. (STEDH (Sección cuarta) Allan c. Reino Unido, nº48539/99, de 5 de noviembre de 2002)⁵¹

C) Demanda anónima

Será inadmitida una demanda cuando sea anónima, ya que el demandante debe ser correctamente identificado en el formulario de la demanda salvo que el Tribunal decida que no debe conocerse su identidad, en ese caso el demandante se mencionará por sus iniciales o con una sola letra. (art.47 RTEDH).

Una demanda anónima se considera cuando del formulario de la demanda no se obtenga ninguna información que permita identificar al demandante por el Tribunal. (Decisión de la Sección Tercera, caso Blondje c. Países Bajos, nº 7245/09, del 15 de septiembre de 2009).⁵²

También se considera anónima una demanda interpuesta por una asociación en nombre de un conjunto de personas que no han sido identificadas, la asociación no era la víctima, sino que la violación que alegaba era el derecho a la vida privada de los sujetos sin identificar.

No se consideraría una demanda anónima si el demandante ha dotado al tribunal los elementos suficientes que hagan posible su identificación y establecer relación con los hechos y las quejas que invoca. (STEDH (Gran Sala) Sindicatul Pastoral cet Bun c. Rumania, nº2330/90, de 9 de julio de 2013)⁵³

D) Demanda reiterativa

Una demanda reiterativa se entiende por aquella demanda que sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el TEDH o ya haya estado sometida a

⁵⁰ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-122432> Última visita el 6 de noviembre de 2019.

⁵¹ Fuente <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-60713> Última visita el 6 de noviembre de 2019.

⁵² CARRILLO SALCEDO, J. A , *El Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Tecnos, Madrid, 2003
Fuente: <https://hudoc.echr.coe.int/spa> Última visita el 6 de noviembre de 2019.

⁵³ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-122705> Última visita el 6 de noviembre de 2019.

otra instancia internacional de investigación y no contenga hechos nuevos recogido en el sentido recogido en el art. 35.2 b) del CEDH.

Una demanda esencialmente idéntica que una demanda analizada anteriormente por el TEDH se podrá identificar a través del análisis si se refiere a la misma persona, los mismos hechos y las mismas quejas. (STEDH (Sección Primera), Declaración, Vojnovic c. Croatie, nº 4819/10, de 26 de junio del 2012)⁵⁴. Por tanto, se entiende que una demanda es reiterativa cuando en base a los mismos hechos alegados a la demanda anterior, la parte demandante aporta razonamientos jurídicos nuevos o aporta información general que no va a modificar la desestimación previa.

Hay que destacar que una demanda interestatal no priva a los particulares de presentar una demanda individual para hacer valer sus propias quejas.

Para que una demanda no se considere reiterativa de una demanda basada en los mismos hechos, se debe aportar información que no haya sido analizada por el Tribunal o una nueva queja. (STEDH (Gran Sala) Kafkaris c. Chipre, nº 21906/04, de 12 de febrero de 2008).⁵⁵

También se denomina que una demanda es reiterativa cuando se haya interpuesto la misma demanda en otra instancia internacional de investigación. En este caso además de determinar si son totalmente idénticos los asuntos como hemos explicado previamente, se debe analizar si la instancia ante la que se presenta la demanda en el mismo periodo es una instancia internacional, para ello debe estudiar el Tribunal la naturaleza del órgano de control, el procedimiento llevado a cabo y los efectos de la resolución pueden provocar que el TEDH no tenga competencia. STEDH (Sección segunda) Karoussiotis c. Portugal, nº23205/08, de 1 de febrero de 2011⁵⁶

E) Demanda abusiva

Se entiende por abusivo un comportamiento contrario a la finalidad del derecho de recurso recogido en el CEDH y provoque dificultades para el buen funcionamiento del TEDH o el correcto funcionamiento del procedimiento. (STEDH (Sección tercera) Mirolubovs y otros

⁵⁴ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-112143> Última visita el 15 de noviembre de 2019.

⁵⁵Fuente:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU\(2017\)608734_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf).
Última visita el 13 de noviembre de 2019

Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-85019> Última visita el 16 de noviembre de 2019.

⁵⁶Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-103216> Última visita el 16 de noviembre de 2019.

c Letonia, n°798/05, de 15 de septiembre de 2009) ⁵⁷La inadmisión de las demandas por abusivas se produce en supuestos excepcionales.

El tribunal ha declarado una demanda como abusiva en cinco supuestos:

a) Desinformación del Tribunal

Una demanda es abusiva si los hechos alegados son inventados con la intención de engañar al tribunal. Este abuso se produce cuando el demandante no comunica al Tribunal información relevante para el examen del asunto. (STEDH (Sección cuarta), Al-Nashif c. Bulgaria, n°50963/99, de 20 de junio de 2002)⁵⁸La aportación al procedimiento de documentación falsa provoca una desinformación al Tribunal. La intención de que el Tribunal llegue a una conclusión errónea debe ser probada con suficiente certeza. (STEDH (Sección segunda), Melnik c. Ucrania, n° 72286/01, de 28 de marzo de 2006)⁵⁹

b) Uso de un lenguaje abusivo

El lenguaje se debe entender como abusivo cuando utilice expresiones ofensivas, amenazadoras o provocadoras contra el Estado demandado, el TEDH, o cualquiera de los órganos que lo forman. (STEDH (Sección segunda), Decisión, Rehak c. Republica Checa, n° 67208/01, de 18 de mayo de 2004)⁶⁰

Si tras la advertencia del Tribunal del uso de expresiones abusivas, la parte demandante presenta sus disculpas, la demanda no será inadmitida. (STEDH (Sección Primera), Tchernitsine c. Rusia, n° 5964/02, de 6 de abril de 2006)⁶¹

c) Violación de la confidencialidad del acuerdo amistoso

La obligación de confidencialidad del arreglo amistoso es una obligación impuesta a las partes, para que sea más sencillo llegar a un acuerdo sin que existan presiones externas.

Pero esta obligación no es absoluta e incondicional, es decir, que se pueden exhibir los documentos del acuerdo a un tercero, prohibiendo en todo caso a la publicación en los medios de comunicación las cuestiones sobre las que versa el litigio o cualquier medio que permita que

⁵⁷ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-94026> visita el 11 de octubre de 2019.

⁵⁸ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-60522> visita el 11 de octubre de 2019.

⁵⁹ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-72886> visita el 11 de octubre de 2019.

⁶⁰ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-23947> visita el 11 de octubre de 2019.

⁶¹ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-73129> visita el 11 de octubre de 2019.

está información sea conocida por un gran número de personas (art.38.2 CEDH y 62.2 RTEDH).

Esta actuación será abusiva cuando la divulgación de esta información se haga de forma intencionada y se tengan los indicios suficientes o la certeza de esta intención.

d) Demanda manifiestamente fraudulenta

En este apartado se encuadran las demandas fraudulentas que son sustancialmente iguales a una demanda anterior que haya sido declarada inadmisibile.

Además, se entiende como abusiva la demanda que no tiene ni un mínimo de realidad, que no tenga relación con los intereses personales del demandante o que trata de cantidades grotescas.

5.2 Causas de inadmisión por razón de la competencia del tribunal

A) Incompatibilidad *ratione loci*

Se exige que para que una demanda sea admisible es necesario que la violación de uno de los derechos contemplados en el CEDH y Protocolos anejos se haya producido en la jurisdicción del Estado demandado o en territorio que el Estado tenga un control efectivo. El TEDH debe investigar si el demandante está bajo la jurisdicción de uno de los Estados contratantes o varios.

Si la demanda se interpone respecto a un territorio dependiente, si el Estado parte no hizo una a declaración de extensión de la aplicación del CEDH según lo recogido en el art.56 del CEDH la demanda sería inadmitida por incompatibilidad *ratione loci*

B) Incompatibilidad *ratione temporis*

La incompatibilidad *ratione temporis* está fundamentada en el principio de irretroactividad de los tratados, es decir que los artículos recogidos en el CEDH, un Estado contratante no está sujeto a la obligación de cumplir la protección y el control efectivo de los DDFF en relación con un acto anterior a la fecha de entrada en vigor del CEDH, ni tampoco de cualquier situación que no persista tras su entrada en vigor.

Por lo tanto, la obligación *ratione temporis* se empieza a contar desde la fecha de ratificación del CEDH. El TEDH debe comprobar en cada una de las fases del procedimiento su competencia temporal.

C) Incompatibilidad *ratione personae*

La compatibilidad de una demanda por razón de la persona está regulada en el art. 33 y 34 del CEDH.

Es necesario que, para que exista compatibilidad por razón de la persona que la violación invocada del CEDH haya sido realizada por un Estado Parte o que se le pueda imputar de alguna manera.

Los Estados tienen responsabilidad sobre las actuaciones realizadas por sus autoridades, que tienen obligación de cumplimiento tanto fuera como dentro de su territorio nacional cuando producen efectos fuera de su propio territorio.

El Estado es responsable de violaciones de derechos acogidos por el CEDH por personas que están fuera del territorio nacional pero que confirman estar bajo el control del Estado a través de los agentes que actúan. A modo de ejemplo en la STEDH (sección segunda), Caso de Issa y otros c. Turquía, n° 31821/96, de 16 de noviembre de 2004⁶² trata sobre unos ciudadanos iraquíes, que eran pastores se encontraron en territorio iraquí cerca de la frontera turca, a un grupo de militares que estaban llevando a cabo operaciones militares en este lugar. Tras la retirada de los militares, se encontraron los cuerpos de los pastores mutilados y con heridas de bala provocadas presuntamente por el ejército turco. Al entenderse actos bajo el control de un Estado contratante fuera de su territorio se concibe como jurisdicción de este Estado porque tienen la obligación de respetar los derechos reconocidos en el CEDH tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

En relación con los territorios dependientes de un Estado, pero que este no tiene un control efectivo respecto de este territorio, habrá que entender que será objeto de una inadmisión de la demanda al no tener compatibilidad por razón de la persona.⁶³

Existen excepciones respecto de que la jurisdicción aplicable a una persona que se encuentra situada en el territorio de un Estado es la jurisdicción de ese Estado, no será de aplicación esta jurisdicción cuando en un Estado se sitúa la sede de una organización internacional, y el demandante se queja de la actuación de este, no está razonado que este Estado

⁶² Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-67460> Última visita el 11 de octubre de 2019.

⁶³ Fuente: https://www.echr.coe.int/echr.www.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SPAGUÍA
PRÁCTICA Última visita el 27 de noviembre de 2019

deba ser responsable por sus propias actuaciones, sino que se aplica su jurisdicción por el simple hecho de que la sede de esta organización internacional esté situado en un Estado contratante.

Además, tampoco se entiende que un Estado tendrá responsabilidad de las acciones fundamentadas en resoluciones del Consejo General de Naciones Unidas y actuaciones realizadas previamente o durante una misión especial de la ONU.

D) Incompatibilidad *ratione materiae*

Para que una demanda sea admitida por razón de la materia la queja que se interpone ante el TEDH debe versar sobre un derecho protegido en el CEDH.

El TEDH debe examinar esta incompatibilidad a lo largo de todo el procedimiento sin tener en cuenta si el Estado demandado ha pedido la inadmisión por esta causa.

Las inadmisiones por razón de la materia fundamentalmente se basan en el ámbito de aplicación de las disposiciones del CEDH. Uno de los artículos más usados es el art. 6 del CEDH. En este caso nos vamos a centrar en el ámbito penal que se aplica en el caso que estamos tratando, pero sin olvidar que esta disposición también es de aplicación en el ámbito civil.

Como punto de partida hay saber que engloba el concepto de acusación en materia penal ya que es un concepto autónomo es decir un término que no está recogido en la regulación del ordenamiento jurídico de los Estados Miembros. (STEDH(Sala), Adolf c. Austria, nº8269/78, 26 de marzo de 1982)⁶⁴

Es de relevante mencionar la STEDH (Sala) Caso Dewer c. Bélgica., del 27 de febrero de 1980⁶⁵ en la que se especifica que:

«El carácter penal que el asunto reviste según el Convenio surge de la ambigüedad del de una combinación de factores concordantes. La «acusación» podría, a los efectos del artículo 6, párrafo 1, definirse como la notificación oficial, proveniente de la autoridad competente y del reproche de haber cometido una infracción penal. Varias decisiones y criterios de la Comisión adoptan la idea, que parece bastante semejante, de «repercusiones importantes sobre la situación» del sospechoso»

⁶⁴ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-57417> Última visita el 25 de noviembre de 2019.

⁶⁵ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-165158> Última visita el 25 de noviembre de 2019.

De esta sentencia se refleja que la acusación se entiende por la notificación del órgano judicial de una infracción penal y que la acusación se supedita a la presencia o no de repercusiones importantes por ser sospechoso.

La condición de sospechoso se encuentra definida en la STEDH (Sección Quinta) Caso Bandaletov c Ucrania, de 31 de octubre de 2013⁶⁶ de la siguiente manera:

«“El Tribunal considera que una persona adquiere la condición de sospechoso que solicita la aplicación de las garantías del artículo 6, no cuando se le asigna formalmente, sino cuando las autoridades nacionales tienen razones plausibles para sospechar la participación de esa persona en un delito penal”»

En la STEDH (Pleno), Caso ÖZTÜRK c. Alemania, de 13 de septiembre de 1982⁶⁷ recoge lo siguiente:

«“La Convención no impide que los Estados, en el desempeño de su función de guardianes del interés público, establezcan o mantengan una distinción entre los diferentes tipos de delitos definidos por la legislación interna y delimiten su delineación. pero no se sigue que la clasificación así adoptada sea decisiva para los propósitos de la Convención. El legislador que exime ciertos tipos de conducta de la categoría de delitos penales según la ley nacional puede servir tanto al interés del individuo (ver, *mutatis mutandis*, Engel y otros, citados anteriormente, *ibid.*, Pp. 33, § 80) y los imperativos de la adecuada administración de justicia, especialmente en la medida en que exime a las autoridades judiciales del enjuiciamiento y castigo de numerosas, pero insignificantes, infracciones de las normas de tránsito. La Convención no va en contra de las tendencias de "despenalización", en formas muy diferentes, en los Estados miembros del Consejo de Europa. Sin embargo, si los Estados contratantes pudieran, a su discreción, clasificar un delito como "administrativo" en lugar de penal, ignoren las cláusulas fundamentales de los artículos 6 y 7, la aplicación de estos estaría subordinados a su voluntad soberana. Tal amplia latitud podría conducir a resultados incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención”»

De esta sentencia se desprende que a pesar de que alguna conducta sea calificada como administrativa en el ámbito interno de los Estados contratantes, el carácter de una conducta penal del CEDH es un concepto autónomo, por tanto, aunque una conducta en el derecho

⁶⁶ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-127401> Última visita el 26 de noviembre de 2019.

⁶⁷ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-62111> Última visita el 26 de noviembre de 2019.

interno no se entienda como penal por haberse despenalizado, en la regulación internacional tendrá esta condición si no respetan los derechos recogidos en el CEDH.

Para saber si es de aplicación la vertiente penal del artículo 6 es necesario acudir a la STEDH (Pleno), Caso Engels y otros c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976⁶⁸ proporciona unos criterios para poder determinar si una actuación penal es de aplicación el art. 6 del CEDH que son los siguientes:

«“En primer lugar, saber si el texto o los textos que definen el delito ofensivo pertenecen, de acuerdo con la técnica jurídica del Estado demandado, al derecho penal, al derecho disciplinario o a ambos. Este es un punto de partida simple. La indicación que proporciona tiene solo un valor formal y relativo, debe examinarse a la luz del denominador común de las legislaciones respectivas de los distintos Estados contratantes. En segundo lugar, La naturaleza misma de la ofensa es un elemento de apreciación de mayor peso. En tercer lugar, el grado de severidad de la pena que puede sufrir la persona interesada. En una sociedad apegada al estado de derecho, los «asuntos penales» constituyen privaciones de libertad que pueden ser impuestas por la ley, excepto aquellas que, por su naturaleza, duración o forma de ejecución, no pueden causar prejuicios importantes.”»

Lo concluyente entre estos tres requisitos es conocer si en la regulación interna de los Estados incluye una infracción entre las calificaciones penales. Sino existe clasificación el TEDH deberá explorar la realidad sustancial del procedimiento en cuestión.

El resto de los criterios son facultativos y no tiene la obligación que se recojan todos, para que se aplicable el art. 6 del CEDH la infracción debe ser entendida como penal desde la visión del CEDH o que la infracción provoque en la persona una sanción que por su origen y grado de dureza sea comprendida en el ámbito penal. En algún caso es necesario realizar un análisis conjunto de los criterios, ya que con el estudio de cada uno por separado no permite tener una conclusión clara sobre la presencia de una acusación penal.

Hay que determinar cuándo es aplicable el art. 6 CEDH en el procedimiento penal, por ejemplo en los procedimientos de auxilio jurisdiccional de ámbito penal no es de aplicación la protección del CEDH. (STEDH (Sección Tercera), Gutfreund c. Francia, 12 de junio de 2003)⁶⁹.

⁶⁸Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-62037> Última visita el 26 de noviembre de 2019.

⁶⁹Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-65696> Última visita el 26 de noviembre de 2019.

En la fase de instrucción o de investigación es entendida como ámbito penal, ya que engloba todo el procedimiento en su totalidad como ámbito penal el TEDH. Se llega a esta conclusión porque, aunque el Juez de Instrucción no se articula sobre la pertinencia de la acusación penal, los actos que realiza afectan de forma directa sobre la tramitación y justicia del procedimiento posterior circunscribiendo el enjuiciamiento del asunto. (STEDH (Sección Tercera), Vera Fernández-Huidobro c. España, de 6 de enero de 2010)⁷⁰

De lo recogido anteriormente se puede concluir que en el caso concreto que estamos analizando es susceptible de la aplicación del art. 6.1 del CEDH, ya que se entiende que el Sr. T.J. ha sido objeto de una acusación penal porque ha sido investigado por un delito de arresto abusivo, asalto y desobediencia recogidos en el CP, además tiene la condición de sospechoso pues, las autoridades tenían datos suficientes para entender que tenía posibilidades de ser autor de estos hechos, y se entiende que hubo acusación penal desde el momento que al Sr. T.J. se le puso a disposición judicial.⁷¹

5.3 Causas de inadmisión por razón de fondo

En este apartado se pueden diferenciar dos situaciones las demandas inadmitidas por falta manifiesta de fundamento y las demandas inadmitidas por no tener un perjuicio importante.

A) Carencia manifiesta de fundamento

Se entiende que una demanda carece manifiestamente de fundamento aquella que tras un examen preliminar del contenido material, no se encuentra ningún indicio de violación de los DDFF regulados en el CEDH, por tanto, se puede declarar inadmisibile sin tener que entrar en el examen del fondo del asunto. La demanda carente manifiestamente de fundamento puede ser tanto de la totalidad de la demanda o únicamente parte de ella.

La cuarta instancia es un término utilizado en la jurisprudencia del TEDH, que engloba toda demanda que está basado en una idea equivocada de los demandantes sobre la competencia del TEDH y del control judicial establecido en el CEDH. El demandante tiene la idea que el

⁷⁰Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-148185> Última visita el 30 de noviembre de 2019.

⁷¹ JEANGÉY C., «Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 6 Derecho a un proceso equitativo, artículo 2 del Protocolo nº7 Derecho a un doble grado de Jurisdicción en materia penal, artículo 4 del Protocolo nº7 Derecho a no ser juzgado o castigado dos veces», SALVIOLI F. et al (coord.), *Jurisprudencia Regional Comparada. Tribunal Europeo y la Corte Interamericana*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp.399-461.

Fuente: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_SPA.pdf. Última visita el 20 de noviembre de 2019.

TEDH va a analizar el asunto del mismo modo que lo haría los órganos jurisdiccionales nacionales.

La competencia del TEDH se basa en el control de que los Estados contratantes cumplen con los compromisos en materia de DDFF asumidos al adherirse al CEDH. Es otras palabras, el TEDH no es competente de conocer los errores cometidos en el ordenamiento interno, salvo que estos errores puedan crear una lesión de los derechos y libertades regulados en el CEDH.

Hay que resaltar que en las demandas de cuarta instancia mayoritariamente se alega una violación del art. 6.1 del CEDH que versa sobre el derecho a un proceso equitativo, porque los demandantes invocan este art. desde el punto de vista de la esencia del concepto y en esta regulación se aplica a la equidad procesal, es decir que el proceso sea contradictorio en el que las partes sean escuchadas y comparezcan de forma igualitaria ante el Tribunal.

Las demandas que tienen una ausencia manifiesta de violación de los derechos y libertades recogidos en el CEDH son aquellas cumplen todos los requisitos formales de admisibilidad, no es una demanda de cuarta instancia, pero no existe ninguna traza de violación de los DDFF regulados en el CEDH.

Uno de los casos es cuando la demanda no tiene ninguna apariencia de arbitrariedad, es decir aquellas demandas examinadas por los organismos jurisdiccionales nacionales respecto al fondo que ha sido desarrollado el procedimiento ante los órganos competentes para ello, que el procedimiento llevado a cabo cumple la regulación procesal nacional, que las partes hayan podido actuar en el procedimiento a través de la presentación de alegaciones y pruebas y estas actuaciones hayan sido analizadas por el órgano competente. El Tribunal nacional ha tenido en cuenta todos los hechos relevantes y aplicación de toda fundamentación jurídica oportunos para resolver el asunto y que dicha resolución este motivada. Si se cumplen todas estas condiciones se entiende que la demanda interpuesta no contiene ninguna violación de los derechos humanos.

En los casos en los que se invoca una violación de un derecho regulado en el CEDH que no es absoluto y este sujeto a restricciones, el Tribunal debe analizar la proporcionalidad de la injerencia denunciada.

Para determinar si ha habido una injerencia del Estado contratante que vulnera uno de los derechos restrictivos del CEDH es necesario investigar si la ley nacional regula esta injerencia, hay que determinar si esta injerencia tiene fines legítimos y que esta injerencia es necesaria en el ámbito nacional.

Si existe cada uno de los elementos anteriormente mencionados la injerencia será conforme al CEDH, no existiendo ninguna desproporción entre los fines y los medios utilizados.

Una demanda también es declarada por TEDH como carente de fundamento cuando existe jurisprudencia consolidada de aplicación al caso de forma directa y que desestima la existencia de una violación de los DDFF protegidos por el CEDH

Las quejas no fundamentadas se entienden como las demandas que no cumplen los requisitos formales recogidos en el art.47 RTEDH, lo más habitual es que no se determine la forma en que ha sido violado el derecho protegido simplemente se invoque un artículo del CEDH y además que no se aporte la documentación requerida o cualquier otra acción que desprenda una falta de participación en el procedimiento dará lugar a la inadmisión por falta de fundamento.

Quejas confusas o fantasiosas son aquellas en las que no se comprendan las quejas del demandante ni los hechos que denuncia o aquellas demandas que objetivamente es imposible que hayan podido suceder los hechos relatados.

B) Ausencia de perjuicio importante

Este criterio de inadmisibilidad permite que el TEDH pueda dejar de examinar aquellos asuntos de menor importancia.

Es un nuevo supuesto de inadmisibilidad está compuesto por tres elementos:

El primero de ellos y el eje central es la ausencia de perjuicio importante, para determinar si existe un perjuicio importante debe ser analizada la gravedad de la violación, la percepción subjetiva del demandante y de la envergadura objetiva del asunto todo esto recogido en la STEDH (Sección Primera), caso Korolev c. Rusia, de 1 de abril de 2010.⁷²

La ausencia de perjuicio se puede analizar desde el punto de vista económico, es decir del impacto que le ha causado el procedimiento y además la relevancia que le da al asunto el demandante.

Pero el daño económico sufrido por la parte no es la única causa para entender que ha habido un perjuicio importante, la violación de una disposición del CEDH puede tratar supuestos de importancia y con ello provocar un daño relevante para el demandante sin que sea

⁷² Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-98016> Última visita el 7 de noviembre de 2019.

de carácter patrimonial. Los dos elementos que quedan son de salvaguarda para asegurar que la demanda va a ser estudiada por el TEDH, aunque el perjuicio sea de poca entidad.

La primera de las condiciones es si el respeto de los DDFF exige examinar el fondo del asunto, entendiendo que es necesario realizar un examen sobre el fondo del asunto cuando se trata de cuestiones de carácter general que influyen en el cumplimiento de interpretaciones del CEDH o el examen de la queja es necesaria por razones de orden público. Por ejemplo, cuando se necesita determinar las obligaciones de un Estado contratante en relación con el CEDH o la resolución de un problema que pueda afectar a otras personas en la misma situación que la persona que interpone la acción.

Segundo, el TEDH deberá analizar un asunto que no está basada en un perjuicio importante cuando el asunto no haya sido enjuiciado de forma adecuada o debida por el órgano jurisdiccional interno competente. En este supuesto está aplicando el principio de subsidiariedad, ya que un asunto debe ser examinado por un órgano jurisdiccional ya sea nacional o europeo porque de no ser así se estaría vulnerando el DDFF a la tutela judicial efectiva del particular.

6. FONDO DEL ASUNTO

En este caso concreto hay que determinar si los hechos relatados provocan una violación del derecho a un juicio justo del demandante. Para ello hay que determinar los hechos en los que el demandado se apoya para determinar la presunta violación.

Como hemos relatado en los antecedentes de hecho por unos acontecimientos acaecidos en 1948, el demandante, se inició un procedimiento de instrucción contra el Sr. T.J. por arresto abusivo, asalto y desobediencia. Finalizada la instrucción el expediente fue comunicado a las partes al mismo tiempo. Al entender el órgano judicial que existía una contradicción entre las declaraciones realizadas respecto al delito de asalto y ofrecimiento de droga al Sr. T.J, el juez de instrucción el 10 de septiembre de 1990 decretó que no se había cometido ningún delito y decidió archivar el asunto mediante auto. El juez ordenó la comunicación del expediente al Ministerio Fiscal, en relación del artículo 789.5 apartado cuarto de la LECrim (actual art.779.2 de la LECrim), firmado por el juez en la parte inferior del documento y el Secretario Judicial incluyó la siguiente nota «ejecutado sin interrupción, lo que certifico».

Al día siguiente la decisión es notificada al representante legal de la defensa, en el expediente no se incluía que se hubiera realizado la comunicación al Ministerio Fiscal.

El 7 de noviembre de 1990, más de dos meses más tarde de la comunicación de archivo el Secretario mediante decreto certificó que el Ministerio Fiscal había presentado un recurso de reforma, y subsidiariamente un recurso de apelación contra el auto de archivo de la causa con fecha de 13 de septiembre de 1990.

El 9 de noviembre de 1990 fue notificada a la defensa que la providencia en el que el Juez entiende que el recurso de reforma había sido presentado conforme a la regulación aplicable en ese momento.

El 12 de noviembre de 1990 la defensa solicitó que el recurso de reforma no fuera admitido por presentarse fuera de plazo y que se confirmará el auto de archivo dictado por el Juez de Instrucción. Este recurso fue rechazado por el Tribunal porque las providencias no son susceptibles de recurso.

A través de un auto de 4 de diciembre de 1990, el magistrado instructor confirmó que el recurso del Ministerio Fiscal se había presentado dentro de los plazos legales fundamentándose en la ausencia de indicación de la fecha de recepción del auto de archivo por el Ministerio Fiscal.

El Juez de Instrucción decidió iniciar la fase de apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial, este órgano deniega la excepción preliminar realizada por la defensa por la presentación fuera de plazo, la Audiencia el 6 de noviembre de 1991 dictó sentencia declarando al Sr. T.J culpable de un delito de arresto abusivo, asalto y desobediencia.

Por tanto, hay que determinar si la presentación del recurso de reforma por parte del Ministerio Fiscal supone un perjuicio a la parte acusada vulnerando el derecho a un juicio equitativo ante un órgano jurisdiccional.

El derecho a un juicio justo es un concepto que no tiene una definición concreta, sino que es un concepto con el que engloban diferentes derechos y facultades al ciudadano frente a los órganos jurisdiccionales. El artículo se divide en tres apartados, el primero de ellos enuncia una serie de garantías generales, que se aplican en todos los procedimientos y los otros dos apartados que versan sobre garantías específicas del proceso penal.⁷³

⁷³ Fuente: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_SPA.pdf. Última visita el 20 de noviembre de 2019.

MONEREO ATIENZA, C.; MONEREO PÉREZ, J. L.; ALCÁZAR ORTIZ, S. *La garantía multinivel de los...* cit., p.79

En este caso nos vamos a centrar en el art. 6.1 del CEDH, que trata sobre las garantías generales aplicables a todo tipo de procesos, concretamente si de los hechos mencionados anteriormente es posible que se haya vulnerado el principio de igualdad de armas y el derecho a un procedimiento contradictorio.

El principio de igualdad de armas se entiende como que ambas partes tengan posibilidades razonables de presentar su causa que no provoque una situación de clara desventaja en relación con la parte contraria y que ambas partes tengan conocimiento de todo documento o queja examinada por el juez.

El derecho a un procedimiento contradictorio dota a ambas partes a tener conocimiento de las alegaciones y de los documentos aportados por la otra parte, así como la posibilidad de rebatirlos.

Desde un punto de vista inicial se podría entender que existiera una violación del principio de igualdad de armas y el derecho a un procedimiento contradictorio porque el Ministerio Fiscal estuviera en una posición privilegiada respecto de la situación del acusado, ya que se le permitió interponer al Ministerio Fiscal un recurso de reforma y este fue admitido, aunque hubiera transcurrido el plazo legal para su interposición.

Pero hay que resaltar que el sobreseimiento de la causa por la existencia de una flagrante contradicción entre las pruebas realizadas fue dictado en la fase de instrucción de un procedimiento abreviado. El artículo que analizar hay que analizar es el art. 789. 4 de la LECrim (corresponde al art. 779 de la LECrim actual) en el que se especifica que, una vez realizadas las diligencias preliminares correspondientes, el Juez dictará un auto en este caso que los hechos que son susceptibles de infracción penal, no está justificado que hubieran sido perpetuados por tanto se decretó el sobreseimiento. Pero esta comunicación solo hay constancia que fue recogida por la parte demandante. Ya que en este documento no consta la recepción del Ministerio Fiscal con la mención de visto en la parte inferior del documento, por tanto, no tendría valor de definitivo.

El Fiscal devolvió la comunicación del auto interponiendo un recurso de reforma y subsidiario de apelación en contra del archivo del asunto.

Hay que tener en cuenta que, según el principio de subsidiariedad, los Estados contratantes deben aplicar los medios suficientes en su ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a un juicio justo o equitativo y que el TEDH no tiene la función de determinar cuáles

son los medios que debe aplicar, sino únicamente la supervisión de que el Estado está cumpliendo con las exigencias recogidas en el CEDH. (STEDH (Sala) Brualla Gomez de la Torre contra España, nº 26737/95 de 19 de diciembre de 1997⁷⁴). Así de la jurisprudencia del TEDH se desprende que no debe examinar los errores de hecho o de derecho cometidos por un Estado contratante salvo que estas acciones sean susceptibles de vulnerar derechos y libertades recogidos en el CEDH (STEDH(Pleno) Schenk c. Suiza, nº10862/84, del 12 de julio de 1988).⁷⁵

En algunos supuestos, aunque el Estado Parte haya incurrido en una deficiencia, pero esta no tiene la suficiente gravedad para constituir una violación del art. 6, puede hacerse un análisis global del procedimiento llevado y las circunstancias y puede declararse que se ha producido una violación del derecho a un juicio justo. (STEDH (Pleno), Barberá, Messegué y Jabardo c. España, nº10590/83, de 6 de diciembre de 1988)⁷⁶.

Según la STEDH (Sala) Bulut c. Austria, nº 17358/90 del 22 de febrero de 1996⁷⁷ determina que es responsabilidad de los órganos nacionales la interpretación del Derecho interno como regla general.

En la STEDH (Sala) Van Der Leer c. Holanda , n 11509/85 de 21 de febrero de 1990⁷⁸, establece que:

«“en este caso se refiere a la «legalidad» de la detención controvertida, con inclusión del «procedimiento establecido por la ley». En esta cuestión, el Convenio se remite esencialmente a la legislación nacional y confirma la obligación de respetar tanto las normas sobre el fondo como las procesales; pero exige además que la privación de libertad esté de acuerdo con la finalidad del artículo 5: la protección de la persona contra cualquier actuación arbitraria”». De esta sentencia se deduce que el Estado contratante tiene la competencia de interpretación de las leyes procesales, salvo que sea una regulación arbitraria que vulnere la CEDH.

⁷⁴ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-163975> Última visita el 10 de diciembre de 2019.

⁷⁵ MORENO VIDA, M.N., «El derecho a un proceso equitativo...», *cit.* pp. 87 a 119.

-JIMENA QUESADA, L., «El derecho a un proceso equitativo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su proyección nacional: entre el tiempo para "conocer" Europa y el tiempo para hacer "justicia conforme a los parámetros europeos"», *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, nº 50-51, 2005, pp. 177 a 191.

Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-57572> Última visita el 10 de diciembre de 2019.

⁷⁶ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-61987> Última visita el 10 de diciembre de 2019.

⁷⁷ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164262> Última visita el 10 de diciembre de 2019.

⁷⁸ Fuente: <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164813> Última visita el 10 de diciembre de 2019.

En este caso, se ve con claridad que el Estado Parte en las resoluciones de inadmisión de los recursos de casación y el recurso de amparo determinan que el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal se realizó de forma adecuada, ya que no se podía discernir cuando el expediente estuvo a disposición del Ministerio Fiscal, ni el momento en que la providencia de auto de archivo ha sido notificada, entendiéndose que era un vicio de procedimiento que no afectaba a los derechos de defensa, ni a una violación de un DDFF.

Por todo lo expuesto, se puede declarar que estos hechos no son constitutivos de violación del derecho a un proceso equitativo, porque los hechos acaecidos se basan en la aplicación e interpretación del Derecho interno, por tanto estos hechos sólo son competencia de enjuiciarlos el Estado Parte que ya ha resuelto que el hecho de que en la providencia no conste la fecha de recepción del Ministerio Fiscal, hace que no se pueda empezar a contar el plazo de los 3 días y que estos hechos son únicamente un vicio en el procedimiento no constitutivos de una vulneración grave.⁷⁹

VI. CONCLUSIONES

En base a todo lo expuesto a lo largo de este Dictamen se procede a emitir las siguientes conclusiones:

Primera. – El interesado, sí está legitimado para interponer la demanda individual, ya que es una persona física que ha sido víctima directa porque es la persona física directamente afectada por la acción u omisión de un Estado Miembro porque esta persona ha sido declarada culpable de un delito de arresto abusivo, asalto y desobediencia teniendo en cuenta que al finalizar la fase de instrucción el juez dicta el archivo del procedimiento y fuera de plazo el Ministerio Fiscal recurre esta decisión y se da apertura a la fase del juicio oral acaban condenando al acusado entendiéndose violado el art.6 del derecho a un juicio justo por haber admitido un recurso emitido tras el transcurso del plazo legalmente establecido y mantiene la condición de víctima durante todo el procedimiento porque el Estado contratante del CEDH no ha reconocido la violación de un DDFF y no ha tomado las medidas necesarias para reparar el daño y que no se vuelva a repetir esta acción.

La legitimación pasiva corresponde al Estado Español, por ser uno de los Estados que ratificó el CEDH, teniendo la obligación de cumplir y respetar todos los derechos reconocidos

⁷⁹ LÓPEZ BARJA DE QUIROGA J. *Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, 2º Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012
CASADEVALL J, *El Convenio Europeo de Derechos Humanos.....cit.,p.72*

en el CEDH ya que los hechos susceptibles de una violación de un DDFF ocurrieron bajo su jurisdicción.

Segunda. – La presentación de la demanda se debe realizar a través del formulario oficial establecido para tal efecto, que debe cumplimentarse cada uno de los apartados que sean necesarios para el asunto en concreto. Debe identificarse el demandante, el Estado demandado, los hechos por los que se ha producido la violación, determinar qué derecho ha sido violado, aportando la documentación necesaria para fundamentar nuestra queja y el cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad. Estos documentos deben ser copias porque el TEDH no devuelve la documentación aportada. El formulario debe estar firmado por el demandante o por su representante con una firma original. Este formulario debe ser enviado por correo ordinario, no se aceptará la demanda enviada por fax. El plazo para interponer la demanda es de 6 meses desde la fecha de la resolución que puso fin a la vía interna. Sino se cumplen todos los requisitos formales la demanda será inadmitida y archivada, no llevando a cabo un análisis sobre el fondo del asunto, pero si la demanda es inadmitida y no ha transcurrido el plazo de seis meses se puede volver a interponer de nuevo, resolviendo los errores que tuviera la demanda anterior.

Tercera. – El conocimiento de qué órganos de control y sus competencias es relevante por los cambios que han establecido con el transcurso del tiempo. Si la demanda hubiera sido interpuesta en el momento en que los hechos ocurrieron, esta demanda individual sería recogida y analizada por la Comisión Europea, que tenía poder de decisión sobre si la demanda era admisible y sobre la existencia de una violación de un DDFF. Esta Comisión emitía un informe que era enviado al Comité de Ministros y si la Comisión o por el interés del Estado demandado no se pedía que el asunto se pusiera a disposición del TEDH para que fuera enjuiciado no sería analizado por este. Por tanto, el Comité de Ministros a través de una votación decidían si estaban de acuerdo con la decisión tomada por la Comisión. En la actualidad todas las competencias que tenía la Comisión Europea son asignadas al TEDH que se organiza a través de diferentes formaciones según la relevancia del caso.

Cuarto. - El procedimiento ante el TEDH consta de dos fases, un primer examen y un segundo examen sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. En el primer examen se puede resolver inadmisibile una demanda sin necesidad de un mayor análisis se realizará por el Juez Único. Si este no declara la demanda inadmisibile de plano será remitida a la Comisión que podrá declarar la inadmisión de la demanda, si existe jurisprudencia consolidada sobre el caso y no es necesario un estudio más detallado. Si este órgano no determina la inadmisión será dirigido a la Sala y se realizará una comunicación a las partes informando de los hechos y las presuntas violaciones de los DDFF. Una vez realizada la comunicación por la Comisión o la

Sala resolverá sobre la admisión y sobre el fondo del asunto que estaríamos en la segunda fase del procedimiento. En este momento si la demanda es admitida se lleva a cabo una propuesta de acuerdo amistoso entre las partes, si las partes están de acuerdo y la propuesta se redacta conforme a los DDHH, no se realizará ningún análisis y se procederá al archivo del asunto mediante decisión.

De no llegarse a un acuerdo la Sala dictará sentencia sobre el fondo del asunto, tiene la posibilidad de celebrar una audiencia pública y contradictoria en la que las partes realizarán sus observaciones y la Sala realizará las preguntas que sean convenientes. Al finalizar la vista se levantará un acta en el que recogerán las decisiones tomadas tras la vista. Al finalizar la vista se puede declarar la inadmisibilidad de la demanda procediendo a su archivo, o que la Sala dicte sentencia sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. La Sala puede inhibirse frente a la Gran Sala cuando la demanda suscite incertidumbre sobre la interpretación de los derechos regulados en el CEDH.

Este procedimiento permite al TEDH que los asuntos sean analizados según su importancia dotándole mayor celeridad para la toma de decisiones.

Quinto. – En el procedimiento ante el TEDH es muy importante el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para que pueda llevarse a cabo un análisis sobre el fondo del asunto. Como hemos explicado anteriormente los requisitos de admisibilidad están regulados en el art.35 del CEDH. Los requisitos de admisibilidad son el agotamiento de las vías internas de recurso, que la demanda fuera interpuesta dentro del plazo de seis meses desde la fecha de notificación de la sentencia nacional definitiva, que no sea una demanda anónima, que no resulte esencialmente la misma que otra ya examinada por el TEDH o ya haya sido analizada por otra instancia internacional salvo que se aporten hechos nuevos, que la demanda esté mal fundada o por razón de materia, tiempo, lugar, o persona .

Respecto al agotamiento de las vías internas en este caso sí que se cumple ya que se interpone un recurso de casación y de amparo por la vulneración del DDFF de tutela judicial efectiva que este derecho engloba el derecho a un juicio justo o equitativo y realizan una resolución sobre el fondo del asunto a pesar de ser inadmitido por tanto se entiende que ambos recursos son efectivos y admisibles.

Y la demanda es admisible en relación con la materia, porque es un supuesto de violación del derecho a un juicio justo en el ámbito penal, porque cumple con el concepto de acusación que es la notificación oficial realizada por una autoridad competente por la que se le imputa la comisión de una infracción penal, ya que fue investigado como presunto autor de un

delito penal y además es una infracción penal porque la sanción que le imponen de inhabilitación tiene repercusiones importantes en su vida profesional.

Sexta. – Sobre el análisis del fondo del asunto se basa sobre si la interposición del recurso de reforma por parte del Ministerio Fiscal fuera de plazo del establecido legalmente, al no conocerse el momento en que el Ministerio Fiscal había obtenido la recepción del documento es susceptible de ser una violación del derecho a un juicio justo. Desde un punto de vista inicial se puede entender que la interposición de este recurso transcurridos dos meses desde que el Juez de Instrucción decidió el archivo, se puede entender como una vulneración del principio de igualdad de armas y del derecho a un procedimiento contradictorio al dotar de una posición superior al Ministerio Fiscal.

Pero el hecho de que no estuviera determinada la fecha de recepción del Ministerio Fiscal era una situación que debía ser interpretada por el derecho interno del Estado, ya que versa sobre normativa relativa al procedimiento. Por tanto, hay que entender que estos hechos no conllevan una violación del derecho a un juicio justo, porque según el principio de subsidiariedad la interpretación del derecho interno corresponde a los Estados Miembros.

Esta es la opinión que emitimos como Dictamen y que sometemos a otra mejor fundada en Derecho, firmándola en Zaragoza a 13 de diciembre de 2019

VII. BIBLIOGRAFÍA

-ARBERÍ LLOBREGAT, J.; MORENILLA ALLARD, P. *Convenio europeo de derecho humanos y jurisprudencia del Tribunal Europeo relativa a España: textos, protocolos, nuevo Reglamento del Tribunal, normas complementarias y formulario de demanda.*, Bosch, Barcelona, 1999

-ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO F., «Perfecciones e imperfecciones en el protocolo 11 al Convenio Europeo DE Derechos Humanos y otros comentarios a propósito de su entrada en vigor (I-XI-1998)», *Revista Española de Derecho Constitucional*, nº 56. Mayo-agosto 1999, p.135-152.

- BLÁZQUEZ PEINADO, M.D, «La Directiva 2012/29/UE ¿Un paso adelante en materia de protección a las víctimas en la Unión Europea?», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº 46, Madrid, septiembre/diciembre (2013), pp. 897-934.

-CARRILLO SALCEDO, J. A., *El Convenio Europeo de Derechos Humanos.*, Tecnos, Madrid,2003.

-CASADEVAL J., *El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, 2º Edición, Tirant lo Blanch, Valencia,2012.

- GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE E., «La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de octubre de 2003, *Stone Court Shipping Company, S. A. c/ España*, y las prácticas judiciales españolas para inadmitir recursos», *Revista de la Administración pública*, nº 163, 2004, pp. 169-196.

-IGLESIAS VILA M. «*Subsidiariedad y tribunales internacionales de derechos humanos: ¿deferencia hacia los estados o división cooperativa del trabajo?*», *Revista de la Facultad de Derecho*, nº79,2017, pp.191-222

-JEANGÉY C., «Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 6 Derecho a un proceso equitativo, artículo 2 del Protocolo nº7 Derecho a un doble grado de Jurisdicción en materia penal, artículo 4 del Protocolo nº7 Derecho a no ser juzgado o castigado dos veces», SALVIOLI F. et al (coord.), *Jurisprudencia Regional Comparada. Tribunal Europeo y la Corte Interamericana*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp.399-461.

-JIMENA QUESADA, L., «El derecho a un proceso equitativo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su proyección nacional: entre el tiempo para "conocer" Europa y el tiempo para hacer "justicia conforme a los parámetros europeos"», *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, nº 50-51, 2005, p. 177 a 191.

-LASAGABASTER HERRARTE, I.; LAZKANO BROTONS, Í. *Convenio Europeo de Derechos Humanos: comentario sistemático.*, 3ª edición, Civitas, Navarra, 2015

-LÓPEZ BARJA DE QUIROGA J. *Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, 2º Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012

-LÓPEZ GUERRA, L., «La evolución del sistema europeo de protección de derechos humanos», *Teoría y realidad constitucional*, nº42, 2018, pp.111-130.

-MARTÍN RETORTILLO-BAQUER L., «El concepto de víctima de una violación de los derechos como determinante para el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», *Revista de Administración Pública*, nº175, enero-abril de 2008, pp. 253-284.

-MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ J.L., «Jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: El derecho a la tutela judicial efectiva», *Revista de Derecho Procesal*, nº3, 1987, p.541-546.

- MILONE, C., *El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

-MONEREO ATIENZA, C.; MONEREO PÉREZ, J. L.; ALCÁZAR ORTIZ, S. *La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea*. [s. l.]: Comares, Granada, 2017.

-MORENO VIDA, M.N., «El derecho a un proceso equitativo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», *Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, nº145, 2018, pp. 87 a 119.

-MORTE GÓMEZ, C., *Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: condiciones de admisibilidad y modificaciones recientes del procedimiento*, 2ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

-ORTEGA GIMÉNEZ A.,« ¿Cómo se debe presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?», *Economist & Jurist*, Vol.22, nº 178, 2014, pp. 22-30

-OVEJERO PUENTE, A. M., *El derecho al juicio justo en el convenio europeo de derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

-PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL F., *El recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018

- RUILOBA ALVARIÑO J. «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Organización y Funcionamiento», *Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica*. nº 1, 2006, pp. 56- 68.

-SÁENZ DE SANTA MARÍA P.A., *Sistema de Derecho Internacional Público*, 5ª Edición, Civitas, Navarra, 2018

-SÁNCHEZ PATRÓN J.M, «El Recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Evolución y Perspectiva», *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, nº 18/2º Semestre 2011, pp. 167 – 190.

-SIGNES DE MESA, J. I., *Derecho procesal europeo.*, Iustel, Madrid, 2019.

-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

WEBGRAFÍA:

https://www.echr.coe.int/echr.www.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SP
A GUÍA PRÁCTICA Última visita el 27 de noviembre de 2019

https://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_SPA.pdf Última visita 10 de noviembre

https://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_SPA.pdf
Última visita el 12 de noviembre de 2019

https://www.echr.coe.int/Documents/Report_Rule_47_SPA.pdf. Ultima visita el 13 de noviembre de 2019

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_SPA.pdf. Ultima visita el 20 de noviembre de 2019.

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU\(2017\)608734_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf) Última visita el 13 de noviembre de 2019

VIII. JURISPRUDENCIA

- STEDH (Pleno), Caso Engels y otros c. Países Bajos, nº 5100/71, de 8 de junio de 1976 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-62037>

-STEDH (Sala) Caso Dewer c. Bélgica., del 27 de febrero de 1980 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-165158>

-STEDH(Sala), Adolf c. Austria, nº8269/78, 26 de marzo de 1982, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-57417>

-STEDH(Pleno) Schenk c. Suiza, nº10862/84, del 12 de julio de 1988 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-57572>

-STEDH (Pleno), Barberá, Messegué y Jabardo c. España, nº10590/83, de 6 de diciembre de 1988 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-61987>

-STEDH(Pleno) Soering c. Reino Unido, nº 14038/88 de 7 de julio de 1989 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164736>

-STEDH (Sala) Van Der Leer c. Holanda , n 11509/85 de 21 de febrero de 1990, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164813>,

-STEDH (Sala) Castells c. España, nº 11798/85, de 23 de abril de 1992, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164610>

-STEDH(Sala) Caso Van der Tang c. España, nº 19382/92 , de 13 de julio de 1995, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164331>

-STEDH (Sala) Bulut c. Austria, nº 17358/90 del 22 de febrero de 1996 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-164262>

-STEDH(Sala) Amuur c. Francia, nº19776/92 del 25 de junio de 1996 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-57988>

-STEDH (Sala) Brualla Gomez de la Torre contra España, nº 26737/95 de 19 de diciembre de 1997 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-163975>

-STEDH(Sala), Dalia c. Francia, nº 26102, de 19 de febrero de 1998 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-58130>

-STEDH (Sección cuarta), Al-Nashif c. Bulgaria, nº50963/99, de 20 de junio de 2002
<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-60522>

-STEDH (Sección Tercera), Gutfreund c. Francia, 12 de junio de 2003
<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-65696>

-STEDH (Sección Cuarta), nº29134/03, El Gobierno de la Comunidad Autónoma de País Vasco c. España, de 3 de febrero de 2004 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-44736>

-STEDH (Sección segunda), Decisión, Rehak c. Republica Checa, nº 67208/01, de 18 de mayo de 2004 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-23947>

-STEDH (Sección Cuarta), Celik c. Turquía, nº 41993/98, de 27 de julio de 2004
<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-61945>

-STEDH (Sección segunda), Issa y otros c. Turquía, nº31821, de 16 de noviembre de 2004, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-67460>

-STEDH (Sección Primera) de Ohlen c. Dinamarca, nº63214/00, de 24 de febrero de 2005, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-68389>

-STEDH (Sección Cuarta), Scauvuzzo-Hager y otros c. Suiza, nº41173/98, de 7 de febrero de 2006 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-72323>

-STEDH (Gran Sala), Sejdivic c. Italia, nº 56581/00 de 1 de marzo de 2006, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-184258>

-STEDH (Sección segunda), Melnik c. Ucrania, nº 72286/01, de 28 de marzo de 2006
<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-72886>

-STEDH (Sección Primera), Tchernitsine c. Rusia, nº 5964/02, de 6 de abril de 2006
<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-73129>

-STEDH (Sección 4), Olmez c. Turquía, nº 39464/98, de 22 de febrero de 2007, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-79511>

-STEDH (Gran Sala) Kafkaris c. Chipre, nº 21906/04, de 12 de febrero de 2008
<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-85019>

-STEDH (Sección Segunda), Decisión, Koc y Tosun c. Turquía, nº 23852/04, de 13 de noviembre del 2008, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-89924>

- STC (Pleno), nº 155/2009, de 25 de junio,(BOE núm. 181, de 28 de julio de 2009),ECLI:ES:TC:2009:155,<https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6574>

-STEDH(Sección Tercera)Decisión , caso Blondje c. Países Bajos, nº 7245/09, del 15 de septiembre de 2009, <https://hudoc.echr.coe.int/spa>

-STEDH (Sección tercera) Mirolubovs y otros c Letonia, nº798/05, de 15 de septiembre de 2009 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-94026>

-STEDH (Gran Sala) Varnava y Otros c. Turquía, nº16064/95, de 18 de septiembre de 2009 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-119653>

-STEDH (Sección Cuarta), Caso Norbert Sikorski c. Polonia, nº 17599/05, de 22 de octubre de 2009, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-95317>

-STEDH (Sección Tercera), Vera Fernández-Huidobro c. España, de 6 de enero de 2010 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-148185>

-STEDH (Sección 2), Karoussiotis c. Portugal, nº 23205/08, de 1 de febrero de 2010 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-103165>

-STEDH (Gran Sala), Decisión, Demopouluos y otros c. Turquía, nº 46113/99, del 1 de marzo de 2010 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-97649>

-STEDH (Gran Sala) Gafgen c. Alemania, nº 22978/05, de 1 de junio del 2010 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-99015>

-STEDH (Sección Primera), Karapanagiotou y otros c. Grecia, nº1571/08, de 28 de octubre de 2010, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-101361>

-STEDH (Sección Segunda) Moreira Barbosa c. Portugal, nº 65681/01 , de 21 de diciembre de 2010 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-67740>

-STEDH (Sección segunda) Karoussiotis c. Portugal, nº23205/08, de 1 de febrero de 2011 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-103216>

-STEDH (Sección Tercera), del caso Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Pays-Bas, nº 57602/09, de 4 de octubre de 2011<http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-107247>

-STEDH (Gran Sala), Idalov c. Rusia, nº 5826/03, de 22 de mayo del 2012 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-110986>

-STEDH (Sección Primera), declaración, Vojnovic c. Croatie, nº 4819/10, de 26 de junio del 2012 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-112143>

-STEDH (Gran Sala) Sindicatul Pastorul cet Bun c. Rumania, nº 2330/90, de 9 de julio de 2013, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-122705>

-STEDH (Sección Primera), Brezecc c. Croacia, nº 7177/10, de 18 de julio de 2013, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-122432>

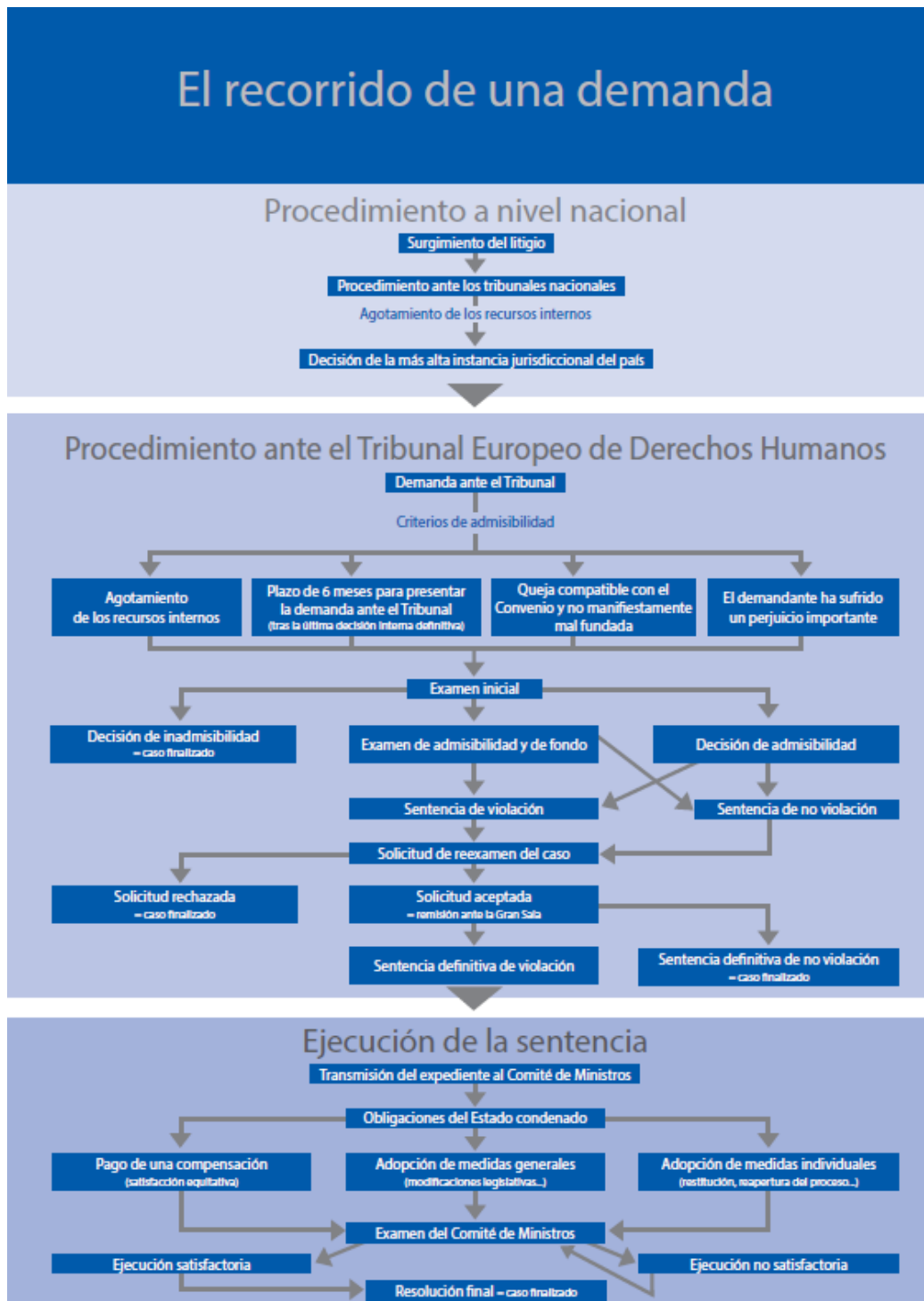
-STEDH (Sección Quinta), Bandaletov c. Ucrania, de 31 de octubre de 2013. <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-127401>

-STEDH (Sección Cuarta), Caso Van Colle c. Reino Unido, nº 7678/09, de 13 de noviembre de 2013, <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-114473>

-STEDH (Comité de la Sección Tercera), Comunidad de Propietarios Pando nº 20 contra España, nº 64204/10, de 20 de diciembre de 2016 <http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-162186>

IX. ANEXOS

ANEXO N°1



ANEXO N°2

Procedimiento simplificado del recorrido de una demanda ante el Tribunal según la formación judicial

